



REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

78ª REUNIÓN — 31ª SESIÓN ORDINARIA (Continuación) — 28 DE NOVIEMBRE DE 1996

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor **EDUARDO MENEM**

del vicepresidente del Honorable Senado, doctor **ANTONIO F. CAFIERO**  
y del vicepresidente 1º del Honorable Senado, don **LEOPOLDO MOREAU**

Secretarios: doctor **EDGARDO R. PIUZZI** y doctora **MATILDE DEL VALLE GUERRERO**  
Prosecretarios: señor **MARIO L. PONTAQUARTO** y doctor **DONALDO A. DIB**

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AGÚNDEZ, Jorge A.  
ALASINO, Augusto  
ALMIRÓN, Carlos H.  
BAUM, Daniel  
BAUZÁ, Eduardo  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BITTEL, Deolindo F.  
BRANDA, Ricardo A.  
CABANA, Fernando V.  
CAFIERO, Antonio F.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA ROSA, Carlos L.  
DE LA SOTA, José M.  
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.  
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela  
FIGUEROA, José O.  
GAGLIARDI, Edgardo J.  
GALVÁN, Raúl A.  
GENOUD, José  
GIOJA, José L.  
LEÓN, Luis A.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MANFREDOTTI, Carlos  
MARANGUELLO, Pedro C.  
MASSAT, Jorge  
MAYA, Héctor M.  
MELGAREJO, Juan I.  
MENEM, Eduardo  
MIRANDA, Julio  
MOREAU, Leopoldo R. G.  
AUDIN, Ernesto R.  
OYARZÚN, Juan C.  
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.  
PRETO, Ruggero

QUINZIO, Bernardo P.  
REUTEMANN, Carlos A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
ROMERO FERIS, José A.  
SÁEZ, José M.  
SALA, Osvaldo R.  
SALUM, Humberto E.  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAG, Felipe R.  
SOLANA, Jorge D.  
STORANI, Conrado H.  
ULLOA, Roberto Augusto  
USANDIZAGA, Horacio  
VAQUIR, Omar M.  
VERNA, Carlos A.  
VILLARROEL, Pedro G.  
VILLAVEVERDE, Jorge A.  
YOMA, Jorge R.  
ZALAZAR, Horacio A.

### AUSENTES, CON AVISO:

AVELÍN, Alfredo  
BRAVO, Leopoldo  
CANTARERO, Emilio M.  
HUMADA, Julio C.  
LÓPEZ, Alcides H.  
MAGLIETTI, Alberto Ramón  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MENECHINI, Javier R.  
PARDO, Angel F.  
TELL, Alberto M.

### POR ENFERMEDAD:

VACA, Eduardo P.

### POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

## SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad en tres proyectos de ley sobre el Régimen de Adopción (C.D.-51/94; S.-420 y 881/95). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 7379.)
2. Moción de reconsideración formulada por el señor senador Moreau con respecto al proyecto de ley aprobado en la reunión anterior por el que se determina la región patagónica a los efectos de las exportaciones y los beneficios contemplados en la ley 23.018 y sus modificatorias. Se rechaza. (Pág. 7411.)
3. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en dos proyectos de ley: uno, del señor senador Figueroa y el otro, de los señores senadores Villarroel y Fadel (m. e.), sobre cuestiones limítrofes entre Santiago del Estero y Catamarca (S.-207/96 y 736/95). Se resuelve postergar la consideración del tema. (Pág. 7414.)
4. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución del que es autor sobre nominación de la Ciudad de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos del 2004 (S.-2.503/96). (Pág. 7452.)
5. Consideración del dictamen de las comisiones de Vivienda, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General en el proyecto de ley de los señores senadores Gioja y Maranguello por el que se modifican los artículos 5º y 22 de la ley 24.404. A moción del señor senador Maranguello se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de ley en revisión sobre el mismo tema (C.D.-119/96). (Pág. 7453.)
6. A moción del señor senador Verna se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga el plazo acordado para la cancelación de deudas y obligaciones originadas por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (P.E.-724/96). (Pág. 7457.)
7. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Pesca y de Ecología y Desarrollo Humano, en mayoría y minoría, en dos proyectos de ley: uno de los señores senadores Ludueña y Mac Karthy y el otro, de los señores senadores Melgarejo y Moreau, por los que se establece un régimen federal de pesca (S.-27 y 1.125/96). Se aprueba. (Pág. 7458.)
8. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda en la insistencia de la Honorable Cámara de Diputados, vinculada con la observación del Poder Ejecutivo nacional al proyecto de ley 24.652 por el que se modifica la ley 23.848, de régimen de pensiones a los ex soldados conscriptos combatientes y civiles que participaron en las acciones bélicas del Atlántico Sur en 1982 (C.D.-151/95). (Pág. 7498.)

9. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Parque Nacional Quebrada del Condorito en la provincia de Córdoba (C.D.-92/96). (Pág. 7499.)
10. A moción del señor senador Cañero se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se cede un terreno a la Universidad Nacional de Landa, Buenos Aires (C.D.-116/96). (Pág. 7502.)
11. A moción del señor senador Cañero se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se transfiere el dominio de diversos terrenos a la Universidad Nacional de Landa, Buenos Aires (C.D.-117/96). (Pág. 7502.)
12. A moción del señor senador Verna se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se exceptúa a cooperativas agropecuarias del pago de la contribución especial establecida en el artículo 6º de la ley 23.427 (C.D.-91/94). (Pág. 7503.)
13. A moción del señor senador Solana se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión sobre régimen de facilidades de pago para la deuda previsional e impositiva de las empresas de servicios integradas por ex agentes de YPF (C.D.-103/96). (Pág. 7504.)
14. A moción del señor senador Salum se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión sobre prestaciones obligatorias por parte de los servicios de medicina prepaga (C.D.-108/96). (Página 7506.)
15. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se amnistia a toda persona que hubiera incurrido en las infracciones previstas en diversos artículos de la ley 17.671, de identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional (C.D.-47/96). (Pág. 7507.)
16. A moción del señor senador Berhongaray se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del que es autor por el que se dispone la creación de la Comisión Nacional Distribuidora de Cuotas de Exportación de Carne Vacuna (S.-1.629/96). (Página 7510.)
17. A moción del señor senador Oyarzún se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el proyecto de ley en revisión sobre prevención y control antidoping en el deporte. (C.D.-66/95). (Pág. 7512.)
18. Manifestaciones del señor senador Cañero acerca de un proyecto sobre contaminación hídrica (Página 7525.)
19. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita se instruya la utilización de balsas en el tramo Zárate-Talavera, Talavera-Zárate, debido a la suspensión del tránsito de vehículos sobre uno de los puentes

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

7

## REGIMEN FEDERAL DE PESCA

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Pesca y de Ecología y Desarrollo Humano, en mayoría y minoría, en dos proyectos de ley: uno de los señores senadores Ludueña y Mac Karthy; el otro, de los señores senadores Melgarejo y Moreau, por los que se establece un régimen federal de pesca. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día N° 1.490 y Anexo.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

### Dictamen de comisión en mayoría

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Pesca y de Ecología y Desarrollo Humano, han considerado el proyecto S.-27/96 presentado por los señores senadores Felipe Ludueña y César Mac Karthy sobre Ley Federal de Pesca, y el proyecto S.-1.125/96 de los señores senadores Juan Ignacio Melgarejo y Leopoldo R. Moreau, y por las razones que os dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

### CAPÍTULO I

#### Disposiciones generales

Artículo 1º — La Nación Argentina asegurará y fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos, la protección efectiva de los intereses nacionales y la promoción de la actividad pesquera en toda la extensión de su soberanía y jurisdicción, para optimizar el uso económico de los recursos asegurando su preservación, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales en tierra que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina, e incre-

mentar la capacidad industrial, presente y futura para la atención de los mercados locales y externos.

Art. 2º — La actividad pesquera constituye y se considera como un sector industrial procesador de recursos pesqueros y se regulará con sujeción al Régimen Federal de Pesca Marítima que se establece en la presente ley.

### CAPÍTULO II

#### Dominio y jurisdicción

Art. 3º — Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción para los fines de su explotación, conservación y administración, a través del marco federal que se establece en la presente ley, los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base que sean reconocidas por la legislación nacional pertinente.

Art. 4º — Son del dominio y jurisdicción compartida de la Nación y las provincias con litoral marítimo, los recursos vivos existentes en las aguas de su Zona Económica Exclusiva y en la plataforma continental argentina, debiendo conceder su explotación conforme a esta ley y su reglamentación.

La jurisdicción nacional se extiende más allá del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, sobre los recursos vivos que poblaren la plataforma continental argentina y respecto de las especies de carácter migratorio o que estuvieran directamente asociadas a especies de la Zona Económica Exclusiva.

### CAPÍTULO III

#### Ámbito de aplicación

Art. 5º — El ámbito de aplicación de esta ley comprende:

- La regulación de la pesca en los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional;
- La coordinación de la protección y la administración de los recursos pesqueros que se encuentran tanto en jurisdicción nacional como provincial;
- La facultad de la autoridad de aplicación de limitar el acceso a la pesca en los espacios marítimos referidos en el artículo 3º cuando se declare la existencia de interés nacional comprometido en la conservación de una especie o recurso determinado, con fundamento en razones científicas que avalen la imposición de tal medida, la que deberá ser puesta a consideración del Consejo Federal Pesquero dentro de los treinta días de adoptada para su ratificación;
- La regulación de la pesca en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva respecto de los recursos migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva.

## CAPÍTULO IV

**Autoridad de aplicación y Consejo Federal Pesquero**

Art. 6º — Créase la Secretaría de Pesca dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, quien será la autoridad de aplicación de esta ley, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Federal Pesquero.

Art. 7º — Conforme a lo establecido en el artículo anterior será competencia de la autoridad de aplicación:

- a) Entender en la formulación y elaboración de la política del sector, la promoción y desarrollo de la pesca, y, en cuanto fuere atinente, al diseño de la política alimentaria nacional;
- b) Conducir la administración pesquera, regular la explotación, fiscalización e investigación y promover la captura, industrialización, exportación y comercialización interna de productos de pesca;
- c) Establecer los objetivos y requerimientos relativos a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros, y al control administrativo;
- d) Regular el ejercicio de la pesca marítima y la conservación y administración de los recursos pesqueros en su Zona Económica Exclusiva y plataforma continental y en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva de conformidad con el artículo 22;
- e) Establecer las capturas máximas permisibles por especie, que en ningún caso serán superiores al rendimiento máximo sostenible de cada una de ellas, a excepción de las especies de ciclo anual cuyos volúmenes de captura se determinarán con ajuste a sus particularidades, todo ello según evaluaciones a cargo del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que serán vinculantes para la autoridad de aplicación;
- f) Determinar, conforme al párrafo anterior, los excedentes disponibles y las restricciones que esta ley autoriza en cuanto a áreas y épocas de veda, métodos de aprehensión y equipos y artes de pesca prohibidos;
- g) Otorgar permisos de pesca con fines comerciales;
- h) Otorgar autorizaciones de pesca con fines de investigación;
- i) Intervenir en la determinación de los puertos pesqueros y zonas de desembarque habilitadas en los puertos bajo jurisdicción nacional;
- j) Reglamentar el ejercicio de la acuicultura en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional;
- k) Establecer los precios mínimos de exportación para los productos pesqueros, con conocimiento previo del Consejo Federal Pesquero;
- l) Aplicar sanciones conforme al régimen de infracciones;
- m) Reglamentar el funcionamiento del registro de pesca establecido por la presente ley;
- n) Dictar las normas relativas a su gestión específica y aclarar las disposiciones de esta ley

proponiendo al Poder Ejecutivo nacional las normas reglamentarias de las mismas;

- ñ) Autorizar la incorporación de nuevos buques a la flota pesquera nacional;
- o) Intervenir en el otorgamiento de los beneficios provenientes de la promoción sectorial concedida o a conceder al sector pesquero;
- p) Determinar el arancel anual de los permisos de pesca y los derechos de extracción dentro de los límites fijados en el artículo 46;
- q) Resolver las situaciones de emergencia que se presenten en el área de su competencia;
- r) Intervenir en la promoción de la construcción, ampliación y modernización de puertos pesqueros y la instalación de diques secos para buques dedicados a esta actividad, conforme a los requerimientos del desarrollo pesquero;
- s) Intervenir en los nuevos proyectos de inversión que cuenten o requieran financiamiento específico proveniente de organismos financieros internacionales y que hayan sido otorgados o a otorgar a la República Argentina, conforme a los criterios que determine juntamente con el Consejo Federal Pesquero;
- t) Ejercer todas las facultades y atribuciones que por esta ley se confiere a la autoridad de aplicación;
- u) Organizar y elaborar la estadística sectorial;
- v) Intervenir en materia de negociación de productos pesqueros en el marco de negociaciones bilaterales o multilaterales internacionales.

Las atribuciones conferidas por los incisos b), c), d), e), h), i), o), p) y r), serán ejercidas mediante resolución conjunta de la autoridad de aplicación y el Consejo Federal Pesquero.

Art. 8º — Créase el Consejo Federal Pesquero, como organismo permanente que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Pesca.

Art. 9º — El Consejo Federal Pesquero estará integrado por:

- a) Un (1) representante de cada una de las provincias con litoral marítimo, designado por los gobiernos provinciales respectivos;
- b) El secretario de Pesca, quien ejercerá la presidencia, y dos representantes designados por el Poder Ejecutivo nacional, por los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores.

Cada uno de los representantes tendrá voz y voto en todas las cuestiones sometidas a consideración.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría.

Art. 10. — El Consejo Federal Pesquero tendrá por objeto:

- a) La elaboración de la política sectorial;
- b) La planificación del desarrollo pesquero nacional y regional;
- c) La promoción del desarrollo de la pesca;
- d) La determinación de políticas de investigación;
- e) La regulación y conservación de los recursos pesqueros;

f) La fijación de las pautas de coparticipación en el Fondo Federal Pesquero.

Art. 11. — En su ámbito funcionará una Comisión Asesora Honoraria integrada por representantes de las distintas cámaras y asociaciones empresarias, existentes o que se conformen en el futuro, de armadores pesqueros, astilleros, constructores y reparadores de buques de pesca, industriales del sector y de las industrias conexas y representantes de las asociaciones sindicales de la actividad con personería gremial.

El Consejo Federal Pesquero recabará la opinión de la Comisión Asesora Honoraria en los temas que estime corresponder.

## CAPÍTULO V

### Investigación

Art. 12. — La autoridad de aplicación, en conjunto con el Consejo Federal Pesquero, establecerá los objetivos, políticas y requerimientos de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos marítimos, correspondiendo al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la planificación y ejecución de sus actividades científicas y técnicas con las provincias y otros organismos o entidades, especialmente en lo que se refiere a la evaluación y conservación de los recursos vivos.

La autoridad de aplicación cooperará con los organismos nacionales y provinciales en las tareas de investigación tendientes a evitar la contaminación.

Art. 13. — El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) administrará y dispondrá de los buques de investigación pesquera de propiedad del Estado nacional, conforme a los requerimientos y políticas que oportunamente fije la autoridad de aplicación, debiendo determinar anualmente el rendimiento máximo sostenible de las principales especies.

Art. 14. — Los resultados de todo trabajo de investigación sobre los recursos pesqueros, deben ser puestos a disposición de la autoridad de aplicación previo a cualquier utilización de los mismos.

Las empresas dedicadas a la extracción de recursos pesqueros están obligadas a suministrar toda la información requerida destinada a la investigación del recurso.

Art. 15. — La pesca experimental por parte de personas físicas o jurídicas nacionales, extranjeras u organismos internacionales con buques de pabellón nacional o extranjero, requerirá autorización otorgada por la autoridad de aplicación, previo dictamen del Consejo Federal Pesquero y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

La autoridad de aplicación tendrá libre acceso a toda información derivada de la investigación científica y técnica y podrá designar representantes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que, con el carácter de observadores presencien los trabajos y verifiquen que ellos se ajustan a las condiciones y límites que se fijen.

Art. 16. — La pesca experimental sólo podrá tener un fin de investigación científica o técnica y en ningún caso podrá tratarse de operaciones comerciales.

La autoridad de aplicación deberá establecer en cada caso plazos y cupos máximos de captura acordes con la finalidad científica o técnica, previo dictamen del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

Cuando esta actividad sea desarrollada por el INIDEP, Conicet y/o universidades nacionales o provinciales estatales, los productos pesqueros obtenidos durante el desarrollo de la misma podrán ser enajenados en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, debiendo destinarse los fondos así obtenidos a la financiación de la investigación científico-técnica desarrollada por los organismos mencionados.

## CAPÍTULO VI

### Conservación, protección y administración de los recursos

Art. 17. — La actividad pesquera en todos los espacios marítimos argentinos estará sujeta a las restricciones que establezca la autoridad de aplicación, con fundamento en la conservación de los recursos, con el objeto de evitar excesos de explotación y prevenir efectos dañinos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico. Para el ejercicio de esta facultad en los ámbitos marítimos sujetos a la jurisdicción provincial deberán configurarse los extremos legales y cumplirse los recaudos previstos en el artículo 59 inciso c) de la presente.

Las normas regulatorias y las medidas de administración y conservación de los recursos que se adopten con carácter general en virtud de la presente ley serán orientadas a obtener un rendimiento óptimo constante de los recursos vivos del medio acuático.

Art. 18. — La autoridad de aplicación establecerá periódicamente la captura máxima permisible por especie sobre bases científicas, conforme a lo previsto en el artículo 7º, inciso e).

Art. 19. — La autoridad de aplicación podrá establecer zonas o épocas de veda. La información pertinente a la imposición de tales restricciones así como su levantamiento será objeto de amplia difusión a favor de los permisionarios pesqueros y las autoridades competentes de patrullaje y control.

Asimismo, podrá establecer reservas y delimitación de áreas de pesca imponiendo a los permisionarios la obligación de suministrar bajo declaración jurada, información estadística de las capturas obtenidas, esfuerzo de pesca y posición de sus buques.

Art. 20. — Las autoridades competentes, para contribuir al cumplimiento de la legislación nacional sobre pesca, asegurarán, en coordinación con la autoridad de aplicación, la debida vigilancia y control en todo lo que respecta a la operatoria de buques pesqueros y a la explotación de los recursos vivos en los espacios marítimos argentinos y áreas adyacentes.

Art. 21. — La autoridad de aplicación determinará los métodos y técnicas, equipos y artes de pesca prohibidos, promoviendo métodos selectivos de aprehensión. Quedarán especialmente prohibidos en todos los espacios marítimos bajo soberanía o jurisdicción exclusiva argentina, los siguientes actos:

- a) El uso de explosivos de cualquier naturaleza;
- b) El empleo de equipos acústicos y sustancias nocivas como métodos de aprehensión;

- c) Llevar a bordo artes de pesca prohibidos;
- d) Transportar explosivos o sustancias tóxicas en las embarcaciones;
- e) Arrojar a las aguas sustancias o detritos que puedan causar daño a la flora y fauna acuáticas o impedir el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales;
- f) Interceptar peces en los cursos de agua mediante instalaciones, atajos u otros procedimientos que atenten contra la conservación de la flora y fauna acuáticas;
- g) Toda práctica o actos de pesca que causen estragos, sobrepesca o depredación de los recursos vivos del medio acuático;
- h) El ejercicio de actividades pesqueras sin permiso;
- i) El ejercicio de actividades pesqueras en áreas o épocas de veda;
- j) La introducción de flora y fauna acuática exóticas, sin autorización previa de la autoridad competente, o de especies vivas que se declaren perjudiciales para los recursos pesqueros.

Art. 22. — Con el fin de proteger los derechos preferentes que le corresponden a la Nación en su condición de Estado con litoral marítimo, la autoridad de aplicación juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, deberá organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva.

Con este fin la República Argentina acordará con los Estados que deseen pescar esas poblaciones, en la mencionada área adyacente, las medidas necesarias para racionalizar la explotación y asegurar la conservación de los recursos.

La autoridad de aplicación autorizará el ingreso a puertos argentinos a los buques que enarholen pabellón extranjero a fin de efectuar tareas de mantenimiento, reaprovisionamiento, cambios de tripulación y trasbordo de su carga.

## CAPÍTULO VII

### Marco de la actividad pesquera

Art. 23. — Con miras a alcanzar los objetivos descritos, establécense que la explotación, industrialización, comercialización, reproducción y cultivo de los recursos vivos de los espacios marítimos argentinos, así como también la construcción, reparación, modificación y transformación de los buques de pesca se desarrollarán en condiciones de libre comercio, conforme con los siguientes lineamientos:

- a) Todo insumo nacional utilizado para estas actividades, tendrá el mismo tratamiento fiscal y crediticio que los bienes exportados. También gozarán del mismo tratamiento los servicios de reparaciones, modificaciones y transformaciones de los buques de pesca;
- b) Todo insumo, equipo, repuestos y bienes de capital importados, nuevos o usados por las

empresas pesqueras o la industria naval pesquera para ser utilizado en las actividades del sector y que reúna los requisitos establecidos por la legislación respectiva, podrá ser nacionalizado sin pagar impuestos a la importación y/o aranceles, no existiendo para ello restricciones no arancelarias a la importación;

- c) Los productos pesqueros no estarán gravados con derechos de exportación.

Art. 24. — El combustible, aceite y lubricantes que utilicen los buques con pabellón nacional habilitados para la pesca, los buques destinados a la investigación científica y capacitación, y las unidades de control y patrullaje, serán suministrados a precios de exportación o podrán ser importados sin pago de impuestos o aranceles.

## CAPÍTULO VIII

### Régimen de pesca

Art. 25. — Para el ejercicio de la actividad pesquera deberá contarse con la habilitación otorgada por la autoridad de aplicación, mediante alguno de los actos administrativos que se enumeran a continuación, excepto en el caso de la pesca artesanal:

- a) *Permiso de pesca*: que habilita para el ejercicio de la pesca comercial a buques de bandera nacional, matriculados o en trámite de matriculación, para extraer recursos de los espacios marítimos argentinos.

En el caso que dicho permiso habilite para la pesca en alguna de las jurisdicciones provinciales, la autoridad de aplicación deberá contar con la previa aprobación del representante provincial pertinente en el Consejo Federal Pesquero;

- b) *Permiso temporario de pesca*: para buques arrendados de conformidad con lo establecido en el artículo 36;
- c) *Licencia temporaria de pesca*: que habilita para el ejercicio de la pesca comercial a buques de matrícula extranjera, en las condiciones de excepción fijadas en esta ley, quedando totalmente prohibida la captura de recursos vivos en las aguas interiores y el mar territorial argentino;
- d) *Autorización*: que habilita para la aprehensión o recolección de recursos en cantidad limitada, con determinados fines de investigación científica o técnica que se especifican en el documento.

A los fines del presente artículo se considerará pesca artesanal la realizada mediante el empleo de embarcaciones de hasta 30 toneladas de registro bruto.

Art. 26. — La explotación de los recursos vivos, en los espacios marítimos argentinos, sólo podrá ser realizada por personas físicas domiciliadas en el país, o jurídicas de derecho privado que estén constituidas y funcionen de acuerdo con las leyes nacionales.

Los buques empleados regularmente en la actividad pesquera deberán estar inscritos o en trámite de inscripción en la matrícula nacional y enarbolar pabellón argentino.

Art. 27. — Será obligatorio desembarcar la producción de los buques pesqueros en puertos argentinos y zonas de desembarque habilitadas en los mismos a dichos efectos, en las condiciones que establezca la reglamentación.

En caso de fuerza mayor o con fundamento en circunstancias de conveniencia comercial, debidamente acreditados, la autoridad de aplicación podrá autorizar la descarga en puertos extranjeros y el trasbordo en los puertos pesqueros argentinos o en zonas de desembarque habilitados en los puertos o en rada.

Art. 28. — A los efectos de un mejor ordenamiento operativo pesquero, la autoridad portuaria pertinente procederá juntamente con la Prefectura Naval Argentina a efectuar, el traslado a otros puertos o zonas especiales de aquellos buques que por su inactividad, abandono o desuso, constituyan un estorbo para las normales condiciones operativas.

El costo que demande dicho traslado será solventado por el titular del buque.

En caso de buques sujetos a embargo o interdicción, el juez interviniente deberá autorizar su traslado de forma que no afecte el desarrollo de la actividad portuaria.

Art. 29. — En ningún caso podrá disponerse de los productos de la pesca sin someterlos previamente al control sanitario a cargo de los organismos competentes, el que deberá ejercerse sin entorpecer la operatoria pesquera, en las condiciones que fije la reglamentación. A los mismos fines, serán habilitados los medios de transporte, respecto de la conservación de la carga, cuando realicen tránsito interjurisdiccional.

Cumplimentado el control se extenderá la documentación sanitaria correspondiente, que incluirá constancias de su origen, sin la cual será prohibido transitar el territorio de la Nación con productos de la pesca.

Art. 30. — La autoridad de aplicación juntamente con el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) reglamentará mediante un instrumento único, las condiciones de habilitación y funcionamiento de establecimientos y buques con los cuales se capturen o donde se depositen, fraccionen, procesen, transporten o comercialicen productos pesqueros en cualquier grado de elaboración.

La autoridad de aplicación reglamentará el transporte y documentación necesaria para el tránsito de productos pesqueros.

Art. 31. — Los permisos de pesca otorgado a buques con bandera nacional y matriculados en la Prefectura Naval Argentina, serán concedidos en las condiciones que fije la reglamentación, la que deberá contemplar las inversiones realizadas en equipamiento tecnológico, en la renovación de la flota pesquera y en las instalaciones procesadoras en tierra destinadas a lograr mayor valor agregado, y la solvencia económica y disponibilidad financiera probada de la empresa.

Los permisos de pesca serán otorgados respecto a un buque determinado y excluirán todas las especies respecto a las cuales se haya alcanzado el límite de captura

máxima permisible. Esta exclusión será levantada al desaparecer las causas.

Art. 32. — Los permisos de pesca sólo podrán ser suspendidos temporalmente y con carácter general, por razones fundadas en la preservación del recurso y en la utilización racional del mismo.

Podrán también ser revocados por la inactividad injustificada del buque por ciento ochenta (180) días consecutivos o la falta de pago del arancel anual.

Art. 33. — Durante la vigencia del permiso de pesca, sus titulares deberán comunicar con carácter de declaración jurada las capturas obtenidas en la forma y oportunidad que establezca la reglamentación respectiva.

Art. 34. — La aprobación por la autoridad de aplicación de los proyectos que contemplen la incorporación definitiva de nuevas unidades a la flota pesquera nacional, tendrá eficacia para obtener el permiso de pesca respectivo, siempre que la adquisición, construcción o importación se realice dentro del plazo otorgado al efecto. La construcción o importación de buques sin contar con la aprobación previa del proyecto, será por exclusiva cuenta y riesgo del astillero, armador o del importador interviniente.

Art. 35. — El permiso de pesca sólo podrá ser transferido por el titular a otra unidad o unidades de capacidad equivalente cuando ésta o éstas reemplacen a la primera, por siniestro, razones de fuerza mayor, o cuando habiendo llegado al límite de su vida útil sea reemplazada por una embarcación de igual capacidad construida en astilleros argentinos, previa autorización de la autoridad de aplicación.

Art. 36. — Las empresas nacionales que desarrollen habitualmente operaciones de pesca con instalaciones de procesamiento en tierra que empleen más de cien personas y cuenten con capacidad probada y actividad ininterrumpida en el sector durante los últimos tres (3) años anteriores a la correspondiente solicitud, podrán arrendar en forma individual o asociada buques de matrícula extranjera por tiempo determinado, equipados o a casco desnudo, destinados a la captura de excedentes de especies inexploradas o estructuralmente subexploradas, sin afectar las reservas de pesca establecidas, con autorización previa de la autoridad de aplicación.

La capacidad de captura de los buques arrendados, así como la cuota a asignar con los excedentes, deberá guardar relación con la capacidad de producción propia de los locatarios nacionales y no podrá superar el cincuenta por ciento (50 %) de la capacidad de captura anual de bodega propia activa, debiendo ser equitativamente proporcional en su distribución.

En caso de industrias de procesamiento de productos pesqueros con plantas en tierra que no tengan carácter de armadora, la autoridad de aplicación podrá autorizar el arrendamiento atendiendo al nivel de producción durante los últimos tres (3) años o a la necesidad de materia prima.

También podrán acceder a este régimen de excepción aquellas empresas armadoras que poseyendo plantas en tierra con personal en número inferior al establecido en el párrafo primero empleen además tripulantes argentinos en una cantidad tal, que les permita alcanzar



y/o. superar el tope de cien operarios establecido en el primer párrafo del presente artículo.

Los arrendamientos tendrán una duración máxima de veinticuatro (24) meses.

Regirá para estos buques lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 41 de la presente ley.

La inscripción de los contratos y el asiento respectivo serán objeto de un registro especial que tendrá a su cargo la Prefectura Naval Argentina, la que otorgará el pabellón nacional provisorio a los buques, sin perjuicio de la reglamentación, fiscalización y control a cargo de la autoridad de aplicación.

Art. 37. — Los recursos vivos que por esta ley corresponden a los espacios marítimos argentinos, sólo podrán ser explotados por buques de bandera argentina, salvo las excepciones establecidas por este capítulo.

La reserva de bandera a los fines de la pesca comercial será irrenunciable dentro de las aguas interiores y el mar territorial.

Art. 38. — El Estado nacional podrá permitir el acceso a la pesca en los espacios marítimos bajo soberanía argentina a buques de bandera extranjera, mediante tratados internacionales aprobados por ley del Congreso Nacional que contemplen la conservación de los recursos en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva y ventajas equivalentes para el conjunto de la actividad pesquera nacional, cuando la misma no alcance a cubrir la captura máxima permisible fijada para cada especie, pese a haber ejercido regularmente su derecho de incorporar unidades o renovar la flota.

La determinación de la capacidad de captura de la flota argentina, que incluirá a los proyectos aprobados con principio de ejecución, a efectos del cálculo del excedente; sólo podrá hacerse atendiendo a razones estructurales biológicas y económicas, y no a meras ciclicas propias de la actividad ni a hechos extraordinarios de alcance general que hayan afectado su operatividad.

Art. 39. — La concesión de cupos de excedentes de pesca para ser capturados por buques de bandera extranjera en función de los tratados internacionales mencionados en el artículo anterior no podrán afectar las reservas de pesca impuestas en favor de embarcaciones nacionales y quedará sujeta en todos los casos al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- a) Se otorgarán por tiempo limitado y a barcos pesqueros determinados, siempre que no exista interés en incrementar el cupo asignado a las empresas radicadas con planta en tierra.
- b) La actividad de los buques extranjeros se ajustará a las normas de la presente ley, debiendo operar exclusivamente desde puertos argentinos;
- c) Se autorizará por áreas de mar y pesquerías delimitadas geográficamente y con relación a las especies que se determinen para cada caso;
- d) Se abonará el canon que para cada caso determine el Poder Ejecutivo nacional;
- e) Los armadores de buques extranjeros deberán facilitar a bordo de cada buque las comodidades adecuadas para el personal de fiscalización y de investigación cuyo embarque determine la autoridad de aplicación;
- f) La producción deberá ser absorbida, a precios internacionales, por el mercado correspondien-

te al país de origen de los buques con compromiso de no reexportación;

- g) Las exportaciones de los productos pesqueros obtenidos conforme el régimen establecido en el presente artículo no gozarán de los beneficios dispuestos en los regímenes promocionales ni de reembolsos tributarios de ninguna naturaleza.

## CAPÍTULO IX

### *Tripulaciones*

Art. 40. — A los fines de la presente ley, será obligatorio para todas las personas empleadas o contratadas con desempeño a bordo en la actividad pesquera, poseer título, patente, cédula de embarque o certificado de habilitación profesional expedido por autoridad competente en las condiciones que fije la reglamentación.

Art. 41. — La tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por un setenta y cinco por ciento (75 %) como mínimo de argentinos nativos, por opción o naturalizados. La autoridad de aplicación podrá acordar excepciones a dicho principio cuando la falta de personal argentino habilitado así lo justifique, o cuando se trate de unidades que se incorporen a la flota pesquera que generen nuevos puestos de trabajo o impliquen nuevas tecnologías de explotación.

Las excepciones al presente artículo que se establezcan para los buques arrendados conforme lo dispuesto en el artículo 36, en ningún caso podrán superar el cincuenta por ciento (50 %).

Los extranjeros que acrediten residencia permanente en el país y cumplan los demás requisitos de habilitación exigidos por la legislación vigente, serán asimilados a los argentinos a los fines de este artículo.

Art. 42. — La autoridad de aplicación intervendrá, junto a los organismos responsables, en la capacitación y formación del personal embarcado de la pesca y del personal científico y técnico relacionado con la actividad pesquera, estableciendo institutos apropiados a dichos fines en las ciudades con puertos.

Asimismo impulsará las acciones necesarias a fin de organizar con instituciones educativas, entidades gremiales y empresarias, programas oficiales y cursos de capacitación con salida laboral, en tareas o actividades específicas a desarrollar en las áreas de captura, industrialización y cultivo de recursos pesqueros.

## CAPÍTULO X

### *Registro de la pesca*

Art. 43. — Deberán inscribirse en los registros especiales que llevará la autoridad de aplicación, de acuerdo a la reglamentación que al efecto se dicte, todas las personas físicas o jurídicas que intervengan habitualmente en las siguientes actividades:

- a) Propietarios y armadores pesqueros;
- b) Propietarios, arrendatarios, agentes que intervienen en la comercialización o quienes bajo cualquier otra forma jurídica exploten estable-



cimientos industrializadores de pescado, cámaras frigoríficas y depósitos destinados al mantenimiento y conservación de productos pesqueros.

Art. 44. — La falta, suspensión o cancelación de la inscripción prevista en esta ley no impedirá el ejercicio de las atribuciones acordadas a la autoridad de aplicación ni eximirá a los sometidos a su régimen de las obligaciones y responsabilidades que se establecen para los inscritos.

No será admitida la inscripción de sociedades cuando uno o más de su directores, administradores, gerentes, síndicos, capitanes de náutica y/o pesca, mandatarios o gestores de la misma, estuvieran sancionados con infracciones a la presente ley o a su reglamentación, siempre que mediare pronunciamiento firme.

Asimismo serán eliminadas del registro las sociedades inscritas cuando, dentro del término que se les fije, no excluyan al o los infractores.

Los directores, gerentes, administradores, síndicos, capitanes de náutica y/o pesca que hayan intervenido en operaciones ilícitas en transgresión de esta ley y sus normas reglamentarias, serán personal y solidariamente responsables con las sociedades involucradas en tales operaciones.

Art. 45. — En el caso de inhabilitación de sociedades, basada en sentencia firme, ni éstas ni sus integrantes podrán formar parte de otras sociedades para desarrollar actividades de las previstas en la ley, ni hacerlo a título individual, excepto los accionistas de sociedades anónimas y socios de cooperativas que no actuaron en las funciones indicadas en el artículo anterior cuando se cometió el delito o la infracción que determinó la inhabilitación.

Ninguna empresa inhabilitada podrá seguir haciendo uso de permisos, obtener nuevos, industrializar ni comercializar productos pesqueros, mientras dure la inhabilitación.

## CAPÍTULO XI

### Fondo Federal Pesquero

Art. 46. — Créase el Fondo Federal Pesquero como cuenta especial, que se constituirá con los siguientes recursos:

- a) Arancel anual por permisos de pesca;
- b) Derechos de extracción sobre las capturas de los buques de matrícula nacional habilitados para la pesca comercial de hasta un cuatro por ciento (4 %) del valor de los recursos extraídos;
- c) Derechos de extracción para buques arrendados de hasta un doce por ciento (12 %) del valor libre a bordo de exportación de los productos obtenidos;
- d) Cánones percibidos sobre la actividad de buques de matrícula extranjera con licencia temporaria de pesca;
- e) Las multas impuestas por transgresiones a la presente ley y su reglamentación;

- f) El producido de la venta de productos de la pesca y artes o equipos decomisados por infracciones según los artículos 50 y 57;
- g) Sumas percibidas por la subasta pública de buques extranjeros o nacionales, realizada como consecuencia de infracciones a la normativa vigente;
- h) Donaciones y legados;
- i) Aportes del Tesoro;
- j) Tasas por servicios requeridos;
- k) Los intereses y rentas de los ingresos mencionados en los incisos precedentes;
- l) Otros ingresos derivados de convenios con instituciones o entidades nacionales y/o internacionales.

Art. 47. — El Fondo Federal Pesquero será administrado por la autoridad de aplicación de la presente ley, con intervención del Consejo Federal Pesquero, y será coparticipable entre la Nación y las provincias.

Art. 48. — El Fondo Federal Pesquero se destinará a:

- a) Financiar tareas de investigación con el veinticinco por ciento (25 %) del total del Fondo;
- b) Financiar equipamiento, control de la actividad pesquera y tareas de patrullajes y control realizados por las distintas autoridades competentes, sin perjuicio de los reintegros previstos en el artículo 54, con hasta el veinte por ciento (20 %) del Fondo;
- c) Transferir a las provincias integrantes del Consejo Federal Pesquero un mínimo del cuarenta por ciento (40 %) del Fondo en concepto de coparticipación pesquera que se distribuirá conforme a las pautas que se fijen en el Consejo Federal Pesquero;
- d) Financiar tareas de administración sectorial con hasta el tres por ciento (3 %) del Fondo y del Consejo Federal Pesquero con hasta el dos por ciento (2 %) del Fondo;
- e) Transferir al Tesoro nacional el remanente de los recursos del Fondo.

## CAPÍTULO XII

### Infracciones y sanciones

Art. 49. — Las infracciones a las disposiciones de la presente ley y normativa vigente en la materia serán sancionadas por el régimen que se establece en este capítulo conforme que las mismas sean cometidas por buques pesqueros de pabellón extranjero o de pabellón nacional.

Art. 50. — El ejercicio de las actividades pesqueras en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional con buques de pabellón extranjero sin contar con licencia temporaria o autorización expresa, será reprimido con las siguientes sanciones:

- a) Multa de quinientos mil dólares estadounidenses (u\$s 500.000) y hasta dos millones de dólares estadounidenses (u\$s 2.000.000) o hasta

un máximo del ciento por ciento (100 %) del valor del buque, si éste fuera superior a este último monto; quedando obligados el armador y el propietario en forma solidaria. El valor del buque se determinará de conformidad con los precios vigentes en el mercado internacional.

La aplicación de la multa irá acompañada indefectiblemente por el decomiso de la totalidad de los productos de la pesca y de las artes y equipos de pesca del buque infractor;

**b) Decomiso del buque.**

Las sanciones serán de carácter acumulativo. En todos los casos se tendrá en cuenta la reincidencia, los métodos utilizados para la pesca, el número de buques intervinientes, el volumen y las especies capturadas y la conducta del capitán al tiempo de la detención del buque.

A los fines de la reincidencia se considerará a la empresa propietaria o armadora con independencia del buque utilizado en la infracción.

**Art. 51.**— Cuando el buque infractor perteneciese a un armador o empresa extranjera autorizada a pescar en los espacios marítimos argentinos mediante la utilización de otras embarcaciones, además de las sanciones previstas en el presente capítulo, la autoridad de aplicación dispondrá la cancelación de las autorizaciones o permisos otorgados en su oportunidad.

**Art. 52.**— Salvo prueba en contrario las capturas que se hallen a bordo de un buque de pabellón extranjero que ingrese a la Zona Económica Exclusiva Argentina, sin previo aviso a la autoridad marítima de su entrada y carga transportada con 24 horas de anticipación, o sin contar con licencia temporaria o autorización expresa, se presumen obtenidas en aguas sujetas a jurisdicción nacional.

**Art. 53.**— Las sanciones previstas en los artículos anteriores serán aplicadas por la Prefectura Naval Argentina, previo sumario que asegure el derecho de defensa. Dicha autoridad marítima podrá disponer, además, la retención de la embarcación extranjera en puerto argentino, hasta que se haga efectivo el pago de la multa o se constituya fianza u otra garantía suficiente si fuera el caso.

Asimismo, comunicará la nómina de los infractores para su publicación en los órganos marítimos internacionales.

**Art. 54.**— Los gastos en que incurran las autoridades de patrullaje y control cuyo apoyo se requiera para la represión de los infractores, serán reintegrados con los fondos recaudados con las sanciones aplicadas, en cada caso.

**Art. 55.**— Las sanciones aplicadas por la Prefectura Naval Argentina podrán ser apeladas por ante la cámara federal competente, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación, previo pago o cumplimiento.

**Art. 56.**— Toda infracción a las disposiciones contenidas en esta ley, a los reglamentos o resoluciones vigentes en la materia, o a los que se dicten como

consecuencia de este cuerpo legal, será sancionada por la autoridad de aplicación, salvo lo dispuesto en los artículos 52, 53 y 54, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por violación de la ley penal o aduanera aplicable.

**Art. 57.**— Las infracciones a que se refieren los artículos anteriores serán reprimidas con una o más de las sanciones establecidas en este artículo, previo sumario en que se asegure el derecho de defensa y se valore la naturaleza de la infracción y el perjuicio causado:

- a) Apercibimiento;
- b) Multa de treinta mil dólares estadounidenses (u\$s 30.000) como mínimo, hasta un máximo de trescientos mil dólares estadounidenses (u\$s 300.000), quedando obligados el armador y el propietario, en forma solidaria;
- c) Suspensión de la inscripción de treinta (30) días a dos (2) años;
- d) Cancelación de la inscripción;
- e) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- f) Suspensión de cinco (5) días a un (1) año del permiso de pesca o cancelación del mismo;
- g) Decomiso de los productos, cuando no se justifique el origen lícito de los mismos.

**Art. 58.**— La autoridad de aplicación podrá interrumpir el viaje de pesca en los casos en que la gravedad de la infracción lo justifique.

**Art. 59.**— En cada caso de reincidencia se podrán elevar los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los incisos b), c) y f) del artículo 57, en un diez por ciento (10 %) hasta su duplicación, pudiendo aplicarse más de una sanción.

**Art. 60.**— Cuando como consecuencia de la infracción resulte un beneficio ilícito para el infractor o tercero, la autoridad de aplicación deberá adicionar el monto estimado del mismo a la sanción a aplicar.

**Art. 61.**— Las sanciones impuestas por la autoridad de aplicación de esta ley, serán recurribles dentro de los cinco (5) días hábiles de notificadas y previo depósito del importe correspondiente si se tratase de multas, mediante recursos de reconsideración y apelación en subsidio.

Este recurso se deducirá fundadamente ante la misma autoridad de aplicación, la que deberá resolverlo dentro de los sesenta (60) días contados desde la fecha de su interposición. Si la resolución fuera confirmatoria de la sanción impuesta, notificado que sea el infractor se remitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a la Cámara Nacional de Apelaciones que corresponda, según las leyes que determinen la competencia.

**Art. 62.**— La suspensión o cancelación de la inscripción en los registros exigidos por la presente ley, implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local. A tal fin, las sanciones serán

notificadas por la autoridad de aplicación a las reparticiones u organismos pertinentes con el objeto de que no se practique inspección sanitaria alguna, ni se otorgue ninguna clase de certificados que sirvan para facilitar las operaciones de compra, venta, transporte, elaboración, almacenamiento o exportación de los recursos vivos acuáticos, sus productos y/o subproductos.

Art. 63. — Cuando los transgresores a esta ley y a sus normas reglamentarias sean sociedades, los que tengan a su cargo la dirección, administración, gerencia o fiscalización de la misma, y en su caso, los capitanes o patrones de buques que hubieran intervenido en la comisión del hecho transgresional, serán personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el artículo 57 y de las restantes consecuencias derivadas del hecho ilícito con los resguardos a que alude el primer párrafo del mismo.

Art. 64. — En el caso de los capitanes y patrones de buques podrá requerirse a la autoridad competente la suspensión de la habilitación para desempeñarse en buques pesqueros. La misma podrá imponerse desde cinco (5) días hasta un (1) año. Los antecedentes en poder de la autoridad de aplicación serán remitidos a la autoridad competente para su resolución definitiva.

Art. 65. — Las acciones para imponer sanción por infracción a esta ley y sus normas reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años. El término para la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la comisión de la infracción.

Art. 66. — Se considerará reincidente al armador, propietario y/o capitán que, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción.

Art. 67. — Sin perjuicio de las sanciones administrativas que se establecen en esta ley será considerado incurso en el delito previsto por el artículo 248 del Código Penal, el capitán o patrón de buque pesquero de pabellón nacional que omita el cumplimiento de las obligaciones previstas en el inciso b) del artículo 122 de la ley 20.094.

### CAPÍTULO XIII

#### Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 68. — Las disposiciones de la presente ley rigen sin perjuicio de los derechos y obligaciones que en la materia objeto de la misma correspondan a la República Argentina, en virtud de los tratados internacionales de los cuales es parte.

Art. 69. — El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo de noventa (90) días desde su promulgación.

Art. 70. — Invítase a las provincias con litoral marítimo a adherir al régimen de la presente ley para gozar de los beneficios que por ésta se otorgan.

Art. 71. — La autoridad de aplicación convocará a las provincias con litoral marítimo a integrarse al Consejo Federal Pesquero.

Art. 72. — Deróganse el artículo 4º de la ley 17.094, los artículos 6º al 8º de la ley 21.673, y las leyes 17.500, 18.502, 19.001, 20.136, 20.489, 21.514, 22.018 y 22.107 en todo aquello que se oponga a la presente.

Art. 73. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Salta de la comisión, 31 de octubre de 1998.

Felipe E. Ludueña. — Antonio F. Caffero.  
— José M. Sáez. — Carlos L. de la Rosa.  
— Osvaldo R. Sala. — Enrique M. Martínez Almudévar. — César Mac Karthy.  
— Fernando V. Cabana. — Remo J. Costanzo. — Horacio A. Zalazar. — Ruggero Preto. — Ricardo A. Branda.

### ANTECEDENTES

#### I

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

### LEY FEDERAL DE PESCA

#### CAPÍTULO I

#### Disposiciones generales

Artículo 1º — La Nación Argentina asegurará y fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos, la protección efectiva de los intereses nacionales y la promoción de la actividad pesquera en toda la extensión de su soberanía y jurisdicción, para optimizar el uso económico de los recursos asegurando su preservación, acrecentar su procesamiento por empresas radicadas en el país, dar mayor empleo a mano de obra argentina e incrementar la capacidad industrial presente y futura para la atención de los mercados locales y externos.

Art. 2º — La actividad pesquera constituye y se considera como un sector industrial procesador de recursos pesqueros y se regulará con sujeción al Régimen Federal de Pesca Marítima que se establece en la presente ley.

#### CAPÍTULO II

#### Dominio y jurisdicción

Art. 3º — Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción para los fines de su explotación, conservación y administración, a través del marco federal que se establece en la presente ley, los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base que sean reconocidas por la legislación nacional pertinente.

Art. 4º — Son del dominio y jurisdicción exclusiva de la Nación los recursos vivos existentes en las aguas de su Zona Económica Exclusiva y en la plataforma continental argentina, debiendo conceder su explotación conforme a esta ley y su reglamentación.

La jurisdicción nacional se extiende más allá del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, sobre

los recursos vivos que poblaren la plataforma continental argentina y respecto de las especies de carácter migratorio o que estuvieran directamente asociadas a especies de la Zona Económica Exclusiva.

### CAPÍTULO III

#### *Ámbito de aplicación*

Art. 5º — El ámbito de aplicación de esta ley comprende:

- a) La regulación de la pesca en los espacios marítimos argentinos y en la plataforma continental argentina;
- b) La regulación de la pesca marítima y continental en territorios nacionales;
- c) La coordinación de la protección y la administración de los recursos pesqueros que se encuentran tanto en jurisdicción nacional como provincial;
- d) La facultad del Poder Ejecutivo nacional de limitar el acceso a la pesca en los espacios marítimos referidos en el artículo 3º cuando se declare la existencia de interés nacional comprometido en la conservación de una especie o recurso determinado, con fundamento en razones científicas que avalen la imposición de tal medida;
- e) La regulación de la pesca en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva respecto de los recursos migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva.

### CAPÍTULO IV

#### *Autoridad de aplicación y Consejo Federal Pesquero*

Art. 6º — Créase la Secretaría de Pesca dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, quien será la autoridad de aplicación de esta ley, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Federal Pesquero.

Art. 7º — Conforme a lo establecido en el artículo anterior será competencia de la autoridad de aplicación:

- a) Entender en la formulación y elaboración de la política del sector, la promoción y desarrollo de la pesca, y, en cuanto fuera atinente, al diseño de la política alimentaria nacional;
- b) Conducir la administración pesquera, regular la explotación, fiscalización e investigación y promover la captura, industrialización, exportación y comercialización interna de productos de pesca;
- c) Establecer los objetivos y requerimientos relativos a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros, y al control administrativo;
- d) Regular el ejercicio de la pesca marítima y la conservación y administración de los recursos pesqueros en su Zona Económica Exclusiva y plataforma continental y en la zona adyacente a

la Zona Económica Exclusiva de conformidad con el artículo 22;

- e) Establecer las capturas máximas permisibles por especie, que en ningún caso serán superiores al rendimiento máximo sostenible de cada una de ellas, a excepción de las especies de ciclo anual cuyos volúmenes de captura se determinarán con ajuste a sus particularidades, todo ello según evaluaciones a cargo del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que serán vinculantes para la autoridad de aplicación;
- f) Determinar, conforme al párrafo anterior, los excedentes disponibles y las restricciones que esta ley autoriza en cuanto a áreas y épocas de veda, métodos de aprehensión y equipos y artes de pesca prohibidos;
- g) Otorgar permisos de pesca con fines comerciales;
- h) Otorgar autorizaciones de pesca con fines de investigación;
- i) Intervenir en la determinación de los puertos pesqueros y zonas de desembarque habilitadas en los puertos bajo jurisdicción nacional;
- j) Reglamentar el ejercicio de la acuicultura en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional;
- k) Establecer los precios mínimos de exportación para los productos pesqueros, con conocimiento previo del Consejo Federal Pesquero;
- l) Aplicar sanciones conforme al régimen de infracciones;
- m) Reglamentar el funcionamiento del registro de pesca establecido por la presente ley;
- n) Dictar las normas relativas a su gestión específica y aclarar las disposiciones de esta ley proponiendo al Poder Ejecutivo nacional las normas reglamentarias de las mismas;
- ñ) Autorizar la incorporación de nuevos buques a la flota pesquera nacional;
- o) Intervenir en el otorgamiento de los beneficios provenientes de la promoción sectorial concedida o a conceder al sector pesquero;
- p) Determinar el arancel anual de los permisos de pesca y los derechos de extracción dentro de los límites fijados en el artículo 48;
- q) Resolver las situaciones de emergencia que se presenten en el área de su competencia;
- r) Intervenir en la promoción de la construcción, ampliación y modernización de puertos pesqueros y la instalación de diques secos para buques dedicados a esta actividad, conforme a los requerimientos del desarrollo pesquero;
- s) Intervenir en los nuevos proyectos de inversión que cuenten o requieran financiamiento específico proveniente de organismos financieros internacionales y que hayan sido otorgados o a otorgar a la República Argentina, conforme a los criterios que determine juntamente con el Consejo Federal Pesquero;

- t) Ejercer todas las facultades y atribuciones que por esta ley se confiere a la autoridad de aplicación;
- u) Organizar y elaborar la estadística sectorial;
- v) Intervenir en materia de negociación de productos pesqueros en el marco de negociaciones bilaterales o multilaterales internacionales.

Las atribuciones conferidas por los incisos c), e), h), i), n), p) y r) serán ejercidas mediante resolución conjunta de la autoridad de aplicación y el Consejo Federal Pesquero.

Art. 8º — Créase el Consejo Federal Pesquero, como organismo permanente que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Pesca.

Art. 9º — El Consejo Federal Pesquero estará integrado por:

- a) Un (1) representante de cada una de las provincias con litoral marítimo, designado por los gobiernos provinciales respectivos;
- b) El secretario de Pesca, quien ejercerá la presidencia, con doble voto en caso de empate, y cuatro (4) representantes designados por el Poder Ejecutivo nacional por los ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía y Obras y Servicios Públicos y de Trabajo y Seguridad.

Cada uno de los representantes tendrá voz y voto en todas las cuestiones sometidas a consideración.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría.

Art. 10. — El Consejo Federal Pesquero tendrá por objeto:

- a) La elaboración de la política sectorial;
- b) La planificación del desarrollo pesquero nacional y regional;
- c) La promoción del desarrollo de la pesca;
- d) La determinación de políticas de investigación;
- e) La regulación y conservación de los recursos pesqueros;
- f) La fijación de las pautas de coparticipación en el Fondo Federal Pesquero.

Art. 11. — En su ámbito funcionará una Comisión Asesora Honoraria integrada por representantes de las distintas cámaras y asociaciones empresarias existentes o que se conformen en el futuro de armadores pesqueros, astilleros, constructores y reparadores de buques de pesca, industriales del sector y de las industrias conexas y representantes de las asociaciones sindicales de la actividad con personería gremial.

El Consejo Federal Pesquero recabará la opinión de la Comisión Asesora Honoraria en los temas que estime corresponder.

## CAPÍTULO V

### Investigación

Art. 12. — La autoridad de aplicación, en conjunto con el Consejo Federal Pesquero, establecerá los objetivos, políticas y requerimientos de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos ma-

rítimos, correspondiendo al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la planificación y ejecución de sus actividades científicas y técnicas con las provincias y otros organismos o entidades, especialmente en lo que se refiere a la evaluación y conservación de los recursos vivos.

La autoridad de aplicación cooperará con los organismos nacionales y provinciales en las tareas de investigación tendientes a evitar la contaminación.

Art. 13. — El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) administrará y dispondrá de los buques de investigación pesquera de propiedad del Estado nacional, conforme a los requerimientos y políticas que oportunamente fije la autoridad de aplicación, debiendo determinar anualmente el rendimiento máximo sostenible de las principales especies.

Art. 14. — Los resultados de todo trabajo de investigación sobre los recursos pesqueros, deben ser puestos a disposición de la autoridad de aplicación previo a cualquier utilización de los mismos.

Las empresas dedicadas a la extracción de recursos pesqueros están obligadas a suministrar toda la información requerida destinada a la investigación del recurso.

Art. 15. — La pesca experimental por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras u organismos internacionales con buques de pabellón nacional o extranjero, requerirá autorización otorgada por la autoridad de aplicación, previo dictamen del Consejo Federal Pesquero y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

La autoridad de aplicación tendrá libre acceso a toda información derivada de la investigación científica y técnica y podrá designar representantes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que, con el carácter de observadores presencien los trabajos y verifiquen que ellos se ajusten a las condiciones y límites que se fijen.

Art. 16. — La pesca experimental sólo podrá tener un fin de investigación científica o técnica y en ningún caso podrá tratarse de operaciones comerciales.

La autoridad de aplicación deberá establecer en cada caso plazos y cupos máximos de captura acorde con la finalidad científica o técnica, previo dictamen del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

## CAPÍTULO VI

### Conservación, protección y administración de los recursos

Art. 17. — La actividad pesquera en todos los espacios marítimos argentinos estará sujeta a las restricciones que establezca la autoridad de aplicación, con fundamento en la conservación de los recursos, con el objeto de evitar excesos de explotación y prevenir efectos dañinos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico.

Las normas regulatorias y las medidas de administración y conservación de los recursos que se adopten con

carácter general en virtud de la presente ley serán orientadas a obtener un rendimiento óptimo constante de los recursos vivos del medio acuático.

Art. 18. — La autoridad de aplicación establecerá periódicamente la captura máxima permisible por especie sobre bases científicas, conforme a lo previsto en el artículo 7º, inciso e).

Art. 19. — La autoridad de aplicación podrá establecer zonas o épocas de veda. La información pertinente a la imposición de tales restricciones así como su levantamiento será objeto de amplia difusión a favor de los permisionarios pesqueros y las autoridades competentes de patrullaje y control.

Asimismo podrá establecer reservas y delimitación de áreas de pesca imponiendo a los permisionarios la obligación de suministrar bajo declaración jurada, información estadística de las capturas obtenidas, esfuerzo de pesca y posición de sus buques.

Art. 20. — Las autoridades competentes, para contribuir al cumplimiento de la legislación nacional sobre pesca, asegurarán, en coordinación con la autoridad de aplicación, la debida vigilancia y control en todo lo que respecta a la operatoria de buques pesqueros y a la explotación de los recursos vivos en los espacios marítimos argentinos y áreas adyacentes.

Art. 21. — La autoridad de aplicación determinará los métodos y técnicas, equipos y artes de pesca prohibidos, promoviendo métodos selectivos de aprehensión. Quedarán especialmente prohibidos en todos los espacios marítimos bajo soberanía o jurisdicción exclusiva argentina, los siguientes actos:

- a) El uso de explosivos de cualquier naturaleza;
- b) El empleo de equipos acústicos y sustancias nocivas como métodos de aprehensión;
- c) Llevar a bordo artes de pesca prohibidos;
- d) Transportar explosivos o sustancias tóxicas en las embarcaciones;
- e) Arrojar a las aguas sustancias o detritos que puedan causar daño a la flora y fauna acuáticas o impedir el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales;
- f) Interceptar peces en los cursos de agua mediante instalaciones, atajos u otros procedimientos que atenten contra la conservación de la flora y fauna acuáticas;
- g) Toda práctica o actos de pesca que causen estragos, sobrepesca o depredación de los recursos vivos del medio acuático;
- h) El ejercicio de actividades pesqueras sin permiso;
- i) El ejercicio de actividades pesqueras en áreas o épocas de veda;
- j) La introducción de flora y fauna acuáticas exóticas, sin autorización previa de la autoridad competente, o de especies vivas que se declaran perjudiciales para los recursos pesqueros.

Art. 22. — Con el fin de proteger los derechos preferentes que le corresponden a la Nación en su condición de Estado con litoral marítimo, la autoridad de

aplicación juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, deberá organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva.

Con este fin la República Argentina acordará con los Estados que deseen pescar esas poblaciones, en la mencionada área adyacente, las medidas necesarias para racionalizar la explotación y asegurar la conservación de los recursos.

## CAPÍTULO VII

### Marco de la actividad pesquera

Art. 23. — Con miras a alcanzar los objetivos descriptos, establécese que la explotación, industrialización, comercialización, reproducción y cultivo de los recursos vivos de los espacios marítimos argentinos, así como también la construcción, reparación, modificación y transformación de los buques de pesca se desarrollarán en condiciones de libre comercio, conforme con los siguientes lineamientos:

- a) Todo insumo nacional utilizado para estas actividades, tendrá el mismo tratamiento fiscal y crediticio que los bienes exportados. También gozarán del mismo tratamiento los servicios de reparaciones, modificaciones y transformaciones de los buques de pesca;
- b) Todo insumo, equipo, repuestos y bienes de capital importados, nuevos o usados por las empresas pesqueras o la industria naval pesquera para ser utilizado en las actividades del sector y que reúna los requisitos establecidos por la legislación respectiva, podrá ser nacionalizado sin pagar impuestos a la importación y/o aranceles, no existiendo para ello restricciones ni arancelarias a la importación;
- c) Los productos pesqueros no estarán gravados con derechos de exportación.

Art. 24. — El combustible, aceite y lubricantes que utilicen los buques con pabellón nacional habilitados para la pesca, los buques destinados a la investigación científica y capacitación, y las unidades de control y patrullaje, serán suministrados a precios de exportación o podrán ser importados sin pago de impuestos o aranceles.

## CAPÍTULO VIII

### Régimen de pesca

Art. 25. — Para el ejercicio de la actividad pesquera deberá contarse con la habilitación otorgada por la autoridad de aplicación, mediante alguno de los actos administrativos que se enumeran a continuación, excepto en el caso de la pesca artesanal:

- a) *Permiso de pesca*: que habilita para el ejercicio de la pesca comercial a buques de bandera nacional, matriculados o en trámite de matriculación, para extraer recursos de los espacios marítimos argentinos.

En el caso de que dicho permiso habilite para la pesca en alguna de las jurisdicciones provinciales, la autoridad de aplicación deberá contar con la previa aprobación del representante provincial pertinente en el Consejo Federal Pesquero;

- b) *Permiso temporario de pesca*: para buques arrendados de conformidad con lo establecido en el artículo 37;
- c) *Licencia temporaria de pesca*: que habilita para el ejercicio de la pesca comercial a buques de matrícula extranjera, en las condiciones de excepción fijadas en esta ley, quedando totalmente prohibida la captura de recursos vivos en las aguas interiores y el mar territorial argentino;
- d) *Autorización*: que habilita para la aprehensión o recolección de recursos en cantidad limitada, con determinados fines de investigación científica o técnica que se especifican en el documento.

A los fines del presente artículo se considerará pesca artesanal la realizada mediante el empleo de embarcaciones de hasta 30 toneladas de registro bruto.

Art. 26. — La explotación de los recursos vivos, en los espacios marítimos argentinos, sólo podrá ser realizada por personas físicas domiciliadas en el país, o jurídicas de derecho privado que estén constituidas y funcionen de acuerdo con las leyes nacionales.

Los buques empleados regularmente en la actividad pesquera deberán estar inscritos o en trámite de inscripción en la matrícula nacional y enarbolar pabellón argentino.

Art. 27. — Será obligatorio desembarcar la producción de los buques pesqueros en puertos argentinos y zonas de desembarque habilitadas en los puertos a los efectos de la pesca en las condiciones que establezca la reglamentación.

En caso de fuerza mayor o con fundamento en circunstancias de conveniencia comercial, debidamente acreditadas, la autoridad de aplicación podrá autorizar la descarga en puertos extranjeros y el trasbordo en los puertos pesqueros argentinos o en zonas de desembarque habilitadas en los puertos o en rada.

Art. 28. — Los puertos y zonas de desembarque de productos pesqueros serán habilitados por el Poder Ejecutivo nacional en coordinación con las provincias con litoral marítimo, debiendo determinarse su calificación a los fines de esta ley en las condiciones que establezca la reglamentación.

Dicha calificación implicará la delimitación de espacios específicos para la operatoria de buques pesqueros, descargas, trasbordos, armamentos y reparaciones, de manera que asegure condiciones de eficiencia operativa y prioridad en el uso de muelles y evitando a su vez en dichas zonas el manipuleo de sustancias contaminantes que puedan afectar a los productos de la pesca.

Art. 29. — A los efectos de un mejor ordenamiento operativo pesquero, la autoridad de aplicación solicitará conjuntamente con la Prefectura Naval Argentina a la autoridad competente, el traslado a otros puertos

o zonas especiales de aquellos buques que por su inactividad, abandono o desuso, constituyan un estorbo para las normales condiciones operativas.

El costo que demande dicho traslado será solventado por el titular del buque.

En caso de buques sujetos a embargo o interdicción, el juez interviniente deberá autorizar su traslado de forma que no afecte el desarrollo de la actividad portuaria.

Art. 30. — En ningún caso podrá disponerse de los productos de la pesca sin someterlos previamente al control sanitario a cargo de los organismos competentes, el que deberá ejercerse sin entorpecer la operatoria pesquera, en las condiciones que fije la reglamentación. A los mismos fines, serán habilitados los medios de transporte, respecto de la conservación de la carga, cuando realicen tránsito interjurisdiccional.

Cumplimentado el control se extenderá la documentación sanitaria correspondiente, que incluirá constancias de su origen, sin la cual será prohibido transitar el territorio de la Nación con productos de la pesca.

Art. 31. — La autoridad de aplicación conjuntamente con el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) reglamentará mediante un instrumento único, las condiciones de habilitación y funcionamiento de establecimientos y buques con los cuales se capturen o, donde se depositen, fraccionen, procesen, transporten o comercialicen, productos pesqueros en cualquier grado de elaboración.

La autoridad de aplicación reglamentará el transporte y documentación necesaria para el tránsito de productos pesqueros.

Art. 32. — Los permisos de pesca otorgados a buques con bandera nacional y matriculados en la Prefectura Naval Argentina, serán concedidos con carácter definitivo en las condiciones que fije la reglamentación, la que deberá contemplar las inversiones realizadas en equipamiento tecnológico, en la renovación de la flota pesquera y en las instalaciones procesadoras en tierra destinadas a lograr mayor valor agregado a la materia prima.

Los permisos de pesca serán otorgados respecto a un buque determinado y excluirán todas las especies respecto a las cuales se haya alcanzado el límite de captura máxima permisible. Esta exclusión será levantada al desaparecer las causas.

Art. 33. — Los permisos de pesca sólo podrán ser suspendidos temporalmente y con carácter general, por razones fundadas en la preservación del recurso y en la utilización racional del mismo.

Podrán también ser revocados por la inactividad injustificada del buque por ciento ochenta (180) días consecutivos o la falta de pago del arancel anual.

Art. 34. — Durante la vigencia del permiso de pesca, sus titulares deberán comunicar con carácter de declaración jurada las capturas obtenidas en la forma y por unidad que establezca la reglamentación respectiva.

Art. 35. — La aprobación por la autoridad de aplicación de los proyectos que contemplen la incorporación definitiva de nuevas unidades a la flota pesquera nacional, tendrá eficacia para obtener el permiso de



pesca respectivo, siempre que la adquisición, construcción o importación se realice dentro del plazo otorgado al efecto. La construcción o importación de buques sin contar con la aprobación previa del proyecto, será por exclusiva cuenta y riesgo del astillero, armador o del importador interviniente.

Art. 36. — El permiso de pesca podrá ser transferido por el titular a otra unidad o unidades de capacidad equivalente cuando ésta o éstas reemplacen a la primera, sea por siniestro o desafectación voluntaria, con la sola obligación de notificar a la autoridad de aplicación.

Art. 37. — Las empresas nacionales que desarrollen habitualmente operaciones de pesca con instalaciones de procesamiento en tierra y cuenten con capacidad probada y actividad ininterrumpida en el sector durante los últimos tres (3) años anteriores a la correspondiente solicitud, podrán arrendar en forma individual o asociada buques de matrícula extranjera por tiempo determinado, equipados o a casco desnudo, destinados a la captura de excedentes de especies explotadas o estructuralmente subexplotadas, sin afectar las reservas de pesca establecidas, con autorización previa de la autoridad de aplicación.

La capacidad de captura de los buques arrendados, así como la cuota a asignar con los excedentes, deberá guardar relación con la capacidad de producción propia de los locatarios nacionales y no podrá superar el cincuenta por ciento (50 %) de la capacidad de captura anual de bodega propia activa, debiendo ser equitativamente proporcional en su distribución.

En caso de industrias de procesamiento de productos pesqueros con plantas en tierra que no tengan carácter de armadora, la autoridad de aplicación podrá autorizar el arrendamiento atendiendo al nivel de producción durante los últimos tres (3) años o a la necesidad de materia prima.

Los arrendamientos tendrán una duración máxima de veinticuatro (24) meses.

Regirá para estos buques lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 43 de la presente ley.

La inscripción de los contratos y el asiento respectivo serán objeto de un registro especial que tendrá a su cargo la Prefectura Naval Argentina, la que otorgará el pabellón nacional provisorio a los buques, sin perjuicio de la reglamentación, fiscalización y control a cargo de la autoridad de aplicación.

Art. 38. — Los recursos vivos que por esta ley corresponden a los espacios marítimos argentinos, sólo podrán ser explotados por buques de bandera argentina, salvo las excepciones establecidas por este capítulo.

La reserva de bandera a los fines de la pesca comercial será irrenunciable dentro de las aguas interiores y el mar territorial.

Art. 39. — El Estado nacional podrá permitir el acceso a la pesca en los espacios marítimos bajo soberanía argentina a buques de bandera extranjera, mediante tratados internacionales aprobados por ley del Congreso Nacional que contemplen la conservación de los recursos en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva y ventajas equivalentes par el conjunto de la

actividad pesquera nacional, cuando la misma no alcance a cubrir la captura máxima permisible fijada para cada especie, pese a haber ejercido regularmente su derecho de incorporar unidades o renovar la flota.

La determinación de la capacidad de captura de la flota argentina, que incluirá a los proyectos aprobados con principio de ejecución, a efectos del cálculo del excedente, sólo podrá hacerse atendiendo a razones estructurales biológicas y económicas, y no a mermas cíclicas propias de la actividad ni a hechos extraordinarios de alcance general que hayan afectado su opor- tunidad.

Art. 40. — La concesión de cupos de excedentes de pesca para ser capturados por buques de bandera extranjera en función de los tratados internacionales mencionados en el artículo anterior no podrán afectar las reservas de pesca impuesta en favor de embarcaciones nacionales y quedará sujeta en todos los casos al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- a) Se otorgarán por tiempo limitado y a barcos pesqueros determinados;
- b) La actividad de los buques extranjeros se ajustará a las normas de la presente ley, debiendo operar exclusivamente desde puertos argentinos;
- c) Se autorizará por áreas de mar y pesquerías delimitadas geográficamente y con relación a las especies que se determinen para cada caso;
- d) Se abonará el canon que para cada caso determine el Poder Ejecutivo nacional;
- e) Los armadores de buques extranjeros deberán facilitar a bordo de cada buque las comodidades adecuadas para el personal de fiscalización y de investigación cuyo embarque determine la autoridad de aplicación;
- f) La producción deberá ser absorbida a precios internacionales por el mercado correspondiente al país de origen de los buques con compromiso de no reexportación.

## CAPÍTULO IX

### *Tripulaciones*

Art. 41. — A los fines de la presente ley, será obligatorio para todas las personas empleadas o contratadas con desempeño a bordo en la actividad pesquera, poseer título, patente, cédula de embarque o certificado de habilitación profesional expedido por autoridad competente en las condiciones que fije la reglamentación.

Art. 42. — La tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por un setenta y cinco por ciento (75 %) como mínimo de argentinos nativos, por opción o naturalizados. La autoridad de aplicación podrá acordar excepciones a dicho principio cuando la falta de personal argentino habilitado así lo justifique, o cuando se trate de unidades que se incorporen a la flota pesquera que generen nuevos puestos de trabajo o impliquen nuevas tecnologías de explotación.

Las excepciones al presente artículo que se establezcan para los buques arrendados conforme lo dis-

diez por ciento (10 %) hasta su duplicación, pudiendo aplicarse más de una sanción.

Art. 61. — Cuando como consecuencia de la infracción resulte un beneficio ilícito para el infractor o tercero, la autoridad de aplicación deberá adicionar el monto estimado del mismo a la sanción a aplicar.

Art. 62. — Las sanciones impuestas por la autoridad de aplicación de esta ley, serán recurribles dentro de los cinco (5) días hábiles de notificadas y previo depósito del importe correspondiente si se tratase de multa, mediante recursos de reconsideración y apelación en subsidio.

Este recurso se deducirá fundadamente ante la misma autoridad de aplicación, la que deberá resolverlo dentro de los sesenta (60) días contados desde la fecha de su interposición. Si la resolución fuere confirmatoria de la sanción impuesta, notificado que sea el infractor se remitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a la Cámara Nacional de Apelaciones que corresponda, según las leyes que determinen la competencia.

Art. 63. — La suspensión o cancelación de la inscripción en los registros exigidos por la presente ley, implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local. A tal fin, las sanciones serán notificadas por la autoridad de aplicación a las reparticiones u organismos pertinentes con el objeto de que no se practique inspección sanitaria alguna, ni se otorgue ninguna clase de certificados que sirvan para facilitar las operaciones de compra, venta, transporte, elaboración, almacenamiento o exportación de los recursos vivos acuáticos, sus productos y subproductos.

Art. 64. — Cuando los transgresores a esta ley y a sus normas reglamentarias sean sociedades, los que tengan a su cargo la dirección, administración, gerencia o fiscalización de la misma, y en su caso, los capitanes o patrones de buques que hubieran intervenido en la comisión del hecho transgresional, serán personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el artículo 59 y de las restantes consecuencias derivadas del hecho ilícito con los resguardos a que alude el primer párrafo del mismo.

Art. 65. — En el caso de los capitanes y patrones de buques podrá requerirse a la autoridad competente la suspensión de la habilitación para desempeñarse en buques pesqueros. La que podrá imponerse desde cinco (5) días hasta un (1) año. Los antecedentes en poder de la autoridad de aplicación serán remitidos a la autoridad competente para su resolución definitiva.

Art. 66. — Las acciones para imponer sanción por infracción a esta ley y sus normas reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años. El término para la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la comisión de la infracción.

Art. 67. — Se considerará reincidente al armador, propietario y/o capitán que, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de la infracción, hayan sido sancionados por otra infracción.

Art. 68. — Sin perjuicio de las sanciones administrativas que se establecen en esta ley será considerado incurso en el delito previsto por el artículo 248 del Có-

digo Penal, el capitán o patrón de buque pesquero de pabellón nacional que omita el cumplimiento de las obligaciones previstas en el inciso b) del artículo 122 de la ley 20.094.

### CAPÍTULO XIII

#### *Disposiciones complementarias y transitorias*

Art. 69. — Las disposiciones de la presente ley rigen sin perjuicio de los derechos y obligaciones que en la materia objeto de la misma correspondan a la República Argentina, en virtud de los tratados internacionales de los cuales es parte.

Art. 70. — El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo de noventa (90) días desde su promulgación.

Art. 71. — Invítase a las provincias con litoral marítimo a adherir al régimen de la presente ley para gozar de los beneficios que por ésta se otorga.

Art. 72. — La autoridad de aplicación convocará a las provincias con litoral marítimo a integrarse al Consejo Federal Pesquero.

Art. 73. — Deróganse el artículo 4º de la ley 17.091, los artículos 6º al 8º de la ley 21.673, y las leyes 17.500, 18.502, 19.001, 20.136, 20.489, 21.514, 22.018 y 22.107 en todo aquello que se oponga a la presente.

Art. 74. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Felipe E. Ludueña. — César Mac Karthy.*

### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El origen de la pesca es prácticamente tan antiguo como la historia de la humanidad. En un primer momento el hombre, para alimentarse, recurrió a los frutos naturales y a la caza terrestre porque le eran más asequibles. Pero pronto su afán de dominar otros ámbitos lo llevó hacia los ríos y los mares.

Fue tal vez el Mediterráneo el primer mar que atrajo al hombre lejos de sus costas. Ya en el período neolítico algunos habitantes de sus riberas se aventuraron más allá de las columnas de Hércules y alcanzaron las islas británicas, siendo uno de los principales propósitos de dichas aventuras la práctica de la pesca.

Fue Aristóteles uno de los primeros en ocuparse de la naturaleza e importancia de los recursos pesqueros, lo que hizo en su famosa obra *La política* (libro I, capítulo 13), en ella consideraba al mar como algo que no podía ser apropiado por nadie y los peces y otros animales que lo habitaban pertenecían a quien los capturaba.

Desde esta posición inicial el tratamiento de las pesquerías va a sufrir importantes cambios indisolublemente ligados a la evolución de la jurisdicción sobre los distintos espacios marítimos, el régimen aplicable a este recurso va a depender de la naturaleza jurídica de los espacios donde se produzca su captura.

Así desde una concepción donde primaba la más absoluta libertad en el uso de los océanos el hombre va a dirigirse hacia concepciones mucho más restringidas, corresponde al emperador bizantino León (889-911), el haber establecido la primera limitación al principio indicado en el párrafo precedente al establecer la preferencia y el derecho de los propietarios ribereños a la pesca y a la explotación de la sal, del que quedaban excluidos los extranjeros.

Estos lejanos antecedentes históricos son la prueba palmaria de la importancia del mar y sus recursos para el desarrollo de los pueblos.

Nuestro país posee un extenso litoral caracterizado por más de 4.200 kilómetros de costas, con una zona económica exclusiva cuya superficie supera a la correspondiente al territorio continental, encontrándose localizada en el denominado Atlántico Sudoccidental uno de los últimos caladeros productivos existente en el orbe.

En los últimos quince años la actividad pesquera en nuestro país produjo uno de los booms económicos más notables de nuestra historia, al punto tal que las exportaciones del sector han igualado o superado como ocurrió durante 1994 a los ingresos obtenidos por la exportación de carne.

Esta situación puso de manifiesto la necesidad de dotar al país de un orden normativo actualizado que regulara esta actividad conforme las nuevas situaciones históricas, la evolución técnica-científica operada en la industria, el principio de conservación del recurso, y la evolución operada en el Derecho Internacional del Mar.

En la actualidad esta actividad de vital importancia para el país y para el desarrollo de las provincias patagónicas en especial se encuentra regulada por leyes como la 17.094, 17.500, 18.502 y 20.138 hoy desactualizadas como consecuencia del desarrollo producido en el sector al que hiciera referencia en los párrafos precedentes.

Desde la restauración de la democracia este cuerpo ha procurado saldar esta deuda que tiene para con sus conciudadanos sin haber tenido suerte hasta la fecha por razones por todos conocidas.

Sin perjuicio de lo expuesto, debo destacar los esfuerzos realizados por distintos legisladores, que se han traducido en numerosos proyectos presentados a fin de cumplir con este imperativo ético que es el dotar a la Nación de un texto normativo actualizado que asegure el desarrollo sostenido de la actividad.

En ese contexto este cuerpo sancionó durante el año 1991 un proyecto de ley federal de pesca que tuvo en cuenta proyectos presentados por la bancada mayoritaria, minoritaria y el remitido por el Poder Ejecutivo nacional.

Lamentablemente enviada dicha media sanción a la Cámara de Diputados, en dicho cuerpo no pudo expedirse en los plazos constitucionales produciéndose la caducidad del texto aprobado por la Cámara alta.

Lo indicado precedentemente procuró ser subeunado mediante la reproducción en este Senado del dictamen de mayoría que tuviese media sanción durante el período legislativo de 1994.

A pesar de que el proyecto a tratar ya había sido arduamente debatido por todas las partes otras urgencias del país impidieron su nuevo tratamiento y sanción.

Es por ello que ante el inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias quienes suscriben el presente se plantearon la conveniencia de volver a reproducir aquel dictamen del año 1991 o sobre su base presentar un nuevo proyecto que recogiera algunas modificaciones introducidas en su texto como consecuencia de la evolución operada en la actividad tanto a nivel nacional como internacional.

Habiendo optado por esta última alternativa ponemos a la consideración de este honorable cuerpo un proyecto de ley federal de pesca que reproduce en todos sus aspectos sustanciales el contenido del dictamen de 1991, estando las modificaciones producidas vinculadas a la evolución sufrida por las relaciones bilaterales con el Reino Unido de Gran Bretaña, la entrada en vigencia de la Convención del Derecho del Mar y a la constatación de la posible existencia de actos de mala fe por parte de empresas extranjeras radicadas en nuestro país al amparo de su generosa legislación que al no estar tipificadas impiden su condigna sanción.

Una de las principales razones para introducir algunas modificaciones ha sido la entrada en vigor de la Convención de Montego Bay, procurando que aquellas receptaran esta nueva realidad jurídica.

Debemos finalmente destacar que si bien a pesar del tiempo transcurrido no se ha sancionado una ley de pesca, el gobierno nacional ha producido avances de vital importancia para la protección de la actividad, cupiéndole un rol destacado a nivel internacional a través de su participación en el Core Group avocado a la promoción, elaboración y adopción de nuevas normas internacionales en los foros pertinentes a fin de preservar los recursos ictícolas para las futuras generaciones, tanto en aguas sujetas a la jurisdicción de los Estados como la alta mar.

Es por ello que en honor a la brevedad para el análisis del texto nos remitimos a lo manifestado en oportunidad del debate ocurrido durante las sesiones de 1991 con respecto a la ley federal de pesca, limitándonos ahora a poner a consideración de los señores senadores este proyecto de ley para su consideración.

Por las razones expuestas señor presidente solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Felipe E. Ludueña. — César Mc Karthy.

## II

### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

### LEY DE PESCA

#### CAPÍTULO I

Artículo 1º — Declárase de interés nacional la explotación biológicamente sostenible de la pesca marítima, y la obtención de su máximo efecto multiplicador sobre el resto de la economía, a cuyos efectos esta actividad queda sometida al régimen federal establecido en la presente ley. Enténdese por sostenible aquella que no afecte la preservación del recurso.

## CAPÍTULO II

## Dominio y jurisdicción

Art. 2º — Son del dominio de las provincias con litoral marítimo los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y el Mar Territorial Argentino adyacente a su costa, hasta una distancia de doce (12) millas marinas, medidas según lo establece la ley 23.968 y ejercerán esta jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración.

Art. 3º — Son del dominio del Estado nacional los recursos vivos existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva Argentina y en la Plataforma Continental Argentina, definidas en los términos de la ley 23.968 y decreto 2.623/91, ejerciendo sobre ellos jurisdicción exclusiva.

Art. 4º — La jurisdicción nacional se extenderá a los efectos de la conservación de los recursos más allá del límite exterior de las doscientas (200) millas marinas, sobre las especies de carácter migratoria que nazcan o se desarrollen en la Plataforma Continental Argentina y la Zona Económica Exclusiva, así como también sobre aquellas que intervienen en la cadena trófica de las especies de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

## CAPÍTULO III

## Autoridad de aplicación

Art. 5º — Créase el Consejo Federal Pesquero (COFEPE), que será la autoridad de aplicación de la presente ley juntamente con la Secretaría de Pesca quien, ejercerá las atribuciones contenidas en el artículo 8º.

Invítase a la Nación y a las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego a celebrar un tratado interjurisdiccional que deberá contemplar el objeto, composición, estructura orgánica, competencia y mecanismos para la solución de conflictos interjurisdiccionales, la unificación del manejo del recurso y fijar los criterios mediante los cuales se creará y distribuirá anualmente el Fondo Federal Pesquero, entre otras características del Consejo Federal Pesquero (COFEPE).

El Consejo tendrá por función principal la interpretación y la aplicación armónica de las normativas nacional y provinciales en materia de pesca y sus concordantes, de conformidad con los términos del mencionado convenio. A esos efectos deberá arbitrar todas las medidas necesarias para la resolución de eventuales conflictos, evitando la superposición de jurisdicciones y la fragmentación de autoridades a fin de obtener el más adecuado cumplimiento de las normas de la presente ley.

## Ambito de aplicación

Art. 6º — El ámbito de aplicación de esta ley comprende:

- a) La regulación de la pesca en los espacios marítimos argentinos y la Plataforma Continental Argentina;
- b) La regulación de la pesca marítima en los territorios nacionales;

- c) La coordinación de la protección y la administración de los recursos pesqueros que se encuentren, tanto en la jurisdicción nacional como provincial;
- d) La facultad del Consejo Federal Pesquero (COFEPE), de limitar el acceso a la pesca los espacios marítimos referidos en el artículo 2º cuando ~~sean~~ <sup>sean</sup> ~~comprometidas~~ <sup>comprometidas</sup> ~~pesquerías~~ <sup>pesquerías</sup> ~~declaradas~~ <sup>declaradas</sup> ~~intensamente~~ <sup>intensamente</sup> explotadas o cuando se declare la existencia de interés nacional comprometido en la conservación de una especie o recurso determinado;
- e) La regulación de la pesca en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva, respecto a los recursos descritos en el artículo 4º de la presente norma.

Art. 7º — Créase la Secretaría de Pesca en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Será competencia de la Secretaría de Pesca:

- a) Definir la política del sector e intervenir en la formulación de otras políticas que directa o indirectamente afecten o promuevan la pesca;
- b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la reglamentación de esta ley y dictar las normas administrativas que surjan de ella;
- c) Definir las distintas pesquerías y realizar la estimación del grado de explotación de las pesquerías argentinas, elevando el dictamen al Consejo Federal Pesquero (COFEPE) a los efectos de que éste determine su categorización;
- d) Promover todas las acciones necesarias para mejorar el conocimiento científico de los recursos, y el desarrollo de la actividad pesquera en las etapas primaria y secundaria;
- e) Proponer al Consejo Federal Pesquero (COFEPE) las cuotas globales anuales por pesquería, en base a las evaluaciones del INIDEP y de otras fuentes científicas de reconocida reputación profesional, las que en ningún caso podrán ser superiores al rendimiento máximo sostenible de cada una de ellas, a excepción de las especies de ciclo anual cuyos volúmenes de captura se determinarán con ajuste a sus particularidades biológicas;
- f) Determinar el tamaño de las cuotas individuales de pesca y los procedimientos licitatorios para su asignación a los oferentes, conforme a los artículos 14, 15 y 16;
- g) Aprobar el informe de ejecución anual de la distribución del Fondo Federal Pesquero;
- h) Proponer al Consejo Federal Pesquero (COFEPE) las restricciones de pesca temporarias y su levantamiento, en las áreas, épocas del año y para las especies; así como las prohibiciones al empleo de métodos, artes y equipos de pesca peligrosos para la conservación de las mismas;
- i) Aprobar el Plan Anual de Investigación Pesquera a realizar por el INIDEP y otros orga-

nismos científicos, así como su financiamiento. El Consejo Federal Pesquero (COFEPE) definirá las prioridades sobre las que se elaborará el Plan Anual de Investigación Pesquera;

- j) Proponer al Consejo Federal Pesquero (COFEPE) las autorizaciones para realizar campañas de pesca experimental, previo dictamen del INIDEP;
- k) Intervenir en la determinación de los puertos pesqueros y zonas de desembarque habilitadas en los puertos bajo jurisdicción nacional;
- l) Fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones estipuladas en la presente norma y aplicar las sanciones, conforme al régimen de infracciones previsto en esta ley;
- m) Reglamentar y llevar actualizados los registros establecidos por esta ley;
- n) Autorizar la incorporación de nuevos buques a la flota pesquera nacional emitiendo los permisos de pesca conforme a lo establecido en esta ley;
- ñ) Proponer al Consejo Federal Pesquero (COFEPE) la declaración de parques marinos.

#### CAPÍTULO IV

##### *Régimen de la pesca industrial*

Art. 8º.—El ejercicio de la pesca en los espacios marítimos argentinos y en la Plataforma Continental Argentina se realizará de acuerdo a las modalidades fijadas en este capítulo, con excepción de la pesca artesanal que se regirá por el capítulo V.

Art. 9º.—A los efectos de esta ley se entenderá por:

- a) Cuota global: a la captura máxima admisible anualmente en una determinada pesquería;
- b) Cuota individual: al derecho a capturar anualmente una fracción porcentual de la cuota global. Los tamaños de las cuotas individuales se definirán con anterioridad a cada licitación.

Art. 10.—La Secretaría de Pesca, dentro de los noventa (90) días de aprobada esta ley, realizará la estimación del grado de explotación de las pesquerías argentinas, elevando el dictamen al Consejo Federal Pesquero (COFEPE), a los efectos de que éste determine su categorización en base a la siguiente clasificación:

- a) Pesquerías intensamente explotadas;
- b) Pesquerías en explotación normal;
- c) Pesquerías subexplotadas.

Art. 11.—Para la definición de una pesquería, la Secretaría de Pesca considerará como tal a una especie o a un conjunto de especies cuya captura se realice en una zona determinada del mar, conformando una unidad económica de explotación.

Art. 12.—Para el cumplimiento del artículo 10, la Secretaría de Pesca deberá establecer, para cada pesquería:

- a) Las capturas máximas sostenibles;

- b) Las capturas realizadas en el Mar Argentín por buques de bandera nacional y de otros países, diferenciando entre las efectuadas por buques de naciones ribereñas y no ribereñas;
- c) El grado de explotación resultante, utilizando el criterio que en la reglamentación del artículo 10 de esta ley se adopte.

Para realizar los cálculos descritos en los incisos anteriores deberá tener en cuenta los dictámenes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y, cuando los intervalos de confianza de esas estimaciones se consideren excesivamente amplios o existan otras dudas sobre su consistencia técnica, deberá requerir información proveniente de otras fuentes de reconocido prestigio científico.

Art. 13.—Cada año la Secretaría de Pesca informará al Consejo Federal Pesquero (COFEPE) las variaciones producidas en el grado de explotación de cada pesquería y propondrá las recategorizaciones que correspondan, basándose para ello en la opinión fundada de INIDEP y complementariamente de otras fuentes de reconocido prestigio científico.

Art. 14.—El Consejo Federal Pesquero (COFEPE) aprobará anualmente las cuotas globales de pesca para cada pesquería principal, a propuesta de la Secretaría de Pesca, y los tamaños de las cuotas individuales que se asignarán mediante licitaciones públicas a las personas físicas y jurídicas.

Art. 15.—Al definir los tamaños de las cuotas individuales, la Secretaría de Pesca tendrá en cuenta los objetivos:

- a) Hacerlas accesibles a los pequeños y medianos armadores pesqueros;
- b) Evitar la concentración económica.

Art. 16.—Las cuotas individuales de pesca tendrán un lapso de diez (10) años de duración. La fracción inicial, se reducirá cada año en un diez por ciento (10 %), de modo que al cabo de diez (10) años se extinga el derecho otorgado. Todos los años la Secretaría de Pesca consolidará esas fracciones porcentuales vencidas en cuotas individuales de pesca y las licitará de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley y su reglamentación.

Art. 17.—Es requisito para presentarse a las licitaciones de cuotas individuales poseer un permiso de pesca para un buque determinado, salvo el caso de las empresas que cuenten con instalaciones de procesamiento en tierra, que podrán arrendar temporariamente buques extranjeros o contratar buques con permiso de pesca.

Art. 18.—Los permisos de pesca serán otorgados desde la sanción de esta ley por la Secretaría de Pesca, sin otras condiciones que acreditar la titularidad del buque, tener certificadas sus condiciones de navegabilidad, enarbolar pabellón nacional, estar inscripto en la matrícula nacional y haberse comprobado que sus equipos y artes de pesca se ajustan a las regulaciones en vigencia.

Art. 19.—El régimen de cuotas individuales de pesca se aplicará en todas las pesquerías, cualquiera sea

su grado de explotación, con la excepción prevista en el capítulo V para la pesca artesanal.

Art. 20. — La asignación de las cuotas individuales se realizará por medio de licitación pública, en base a la mayor oferta de un canon de explotación decenal, pagadero anualmente, durante los diez (10) años de vigencia de la cuota individual.

Art. 21. — Cuando para efectuar las capturas a que da lugar la titularidad de la cuota individual, se utilizara un buque factoría, el canon se multiplicará por el coeficiente 2,5. Cuando este tipo de buques contenga el ochenta por ciento (80 %) de tripulación nacional, el canon se multiplicará por el coeficiente 1,75.

Cuando para realizar las capturas a que da lugar la titularidad de la cuota individual, se utilizaran buques extranjeros, el canon se multiplicará por el coeficiente 1,75.

Art. 22. — La Secretaría de Pesca establecerá, en cada pesquería, el porcentaje de especies acompañantes que con respecto a la captura de la especie principal autorizada por la cuota individual, se considerará admisible.

Art. 23. — Las cuotas individuales serán divisibles y libremente transferibles, con la obligación de informar a la Secretaría de Pesca los cambios de titularidad, a fin de que sean inscriptos en el registro respectivo.

Art. 24. — La Secretaría de Pesca podrá intervenir en ese mercado secundario comprando cuotas individuales de pesca, para regular el grado de esfuerzo aplicado en una pesquería, cuando existieran cambios súbitos en las condiciones marinas y biológicas que así lo ameriten.

Art. 25. — Los armadores deberán informar a la Secretaría de Pesca, al iniciar un viaje de pesca el margen no capturado de la cuota individual y al momento del desembarco, sus capturas por especie, la zona en que se realizaron y la cuota individual a la que se imputarán, de acuerdo a la forma que se determine en la reglamentación de esta ley. Igual obligación registrará para los armadores artesanales en lo que les sea atinente.

Art. 26. — Los titulares de las cuotas deberán ser personas físicas domiciliadas en el país o personas jurídicas constituidas de acuerdo a las leyes nacionales.

Art. 27. — Podrá ser deducido del pago del canon en cada cuota anual hasta el quince por ciento (15 %) de los sueldos y salarios, del personal empleado en las plantas de procesamiento en tierra y del personal embarcado de nacionalidad argentina, correspondientes a ese período, excluidas las cargas sociales.

## CAPÍTULO V

### *Régimen de la pesca artesanal*

Art. 28. — La pesca que se realice dentro de un límite de tres (3) millas marinas, medidas desde las líneas de base, quedarán reservada para los pescadores artesanales, con la excepción de la pesca de las especies de ciclo anual que quedará sujeta al régimen que resulte del Tratado Interjurisdiccional, salvo lo dispuesto en el artículo 6º inciso d).

Art. 29. — Cuando dentro del límite enunciado en el artículo anterior no se realicen actividades de pesca artesanal o las capturas tengan escasa relevancia respec-

to de los recursos disponibles, la autoridad de aplicación, mediante ley provincial que lo autorice, podrá disponer la realización de actividades extractivas de carácter industrial, con carácter provisorio.

Art. 30. — La pesca artesanal no estará sujeta al régimen de cuotas individuales de pesca en el espacio del mar reservado por el artículo 28 para su ejercicio. No obstante ello el Consejo Federal Pesquero (COFEPE) a propuesta de la provincia, podrá disponer vedas temporarias de extracción y límites de captura.

Art. 31. — Los pescadores artesanales deberán inscribirse en un registro especial que llevará cada provincia, acreditando a tales efectos que son dueños de no más de dos embarcaciones de una eslora inferior a los dieciocho (18) metros y de menos de cincuenta (50) toneladas de registro bruto y estar domiciliados en la respectiva provincia. En caso de ser una persona jurídica deberá estar integrada exclusivamente por personas físicas que realicen habitualmente tareas de pesca artesanal y estén domiciliadas en la respectiva provincia.

## CAPÍTULO VI

### *Conservación de los recursos*

Art. 32. — La Secretaría de Pesca coordinará con las autoridades marítimas competentes la vigilancia de las operaciones que realicen todo tipo de buques, para evitar la pesca ilegal en aguas argentinas, pudiendo financiar de sus propios recursos los gastos corrientes que requieran estas tareas. En el caso de que se requieran recursos del Fondo Federal Pesquero será obligatoria la conformidad del Consejo Federal Pesquero (COFEPE).

Art. 33. — Quedan prohibidos en todos los espacios marítimos argentinos los siguientes actos:

- a) El uso y el transporte a bordo de explosivos de cualquier naturaleza, de equipos y sustancias nocivas y de artes de pesca prohibidas;
- b) Arrojar a las aguas detritos o sustancias que puedan causar daño a la flora y la fauna acuática;
- c) Interceptar peces mediante instalaciones, atajos u otros procedimientos que atenten contra sus migraciones naturales o la conservación de la flora y la fauna acuática;
- d) Realizar actividades de pesca con aparejos que afecten el fondo marino dentro de las bahías y dentro de una franja de tres (3) millas marinas contadas a partir de la costa;
- e) El ejercicio de actividades de pesca sin autorización o en zonas de veda;
- f) La introducción de flora o fauna acuáticas exóticas o de especies vivas no pertenecientes al ecosistema argentino, sin autorización de la autoridad de aplicación.

Art. 34. — Cuando existan razones sanitarias o biológicas o se manifiesten signos de sobreexplotación de una o varias especies en una zona o en todo el Mar Argentino, la Secretaría de Pesca propondrá al Consejo Federal Pesquero el establecimiento de vedas temporales de captura.

Art. 35. — La Secretaría de Pesca acordará con los Estados, cuyas personas físicas o jurídicas realicen actividades pesqueras en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina, las medidas que permitan racionalizar la explotación de los recursos, en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Mar.

Art. 36. — La Secretaría de Pesca supervisará en el momento del desembarque el cumplimiento de los montos de captura autorizados por las cuotas individuales de pesca a cada titular y también de los montos autorizados para las especies acompañantes, por medio de declaraciones juradas del capitán del buque, que obligarán solidariamente al armador.

Art. 37. — La Secretaría de Pesca propondrá al Consejo Federal Pesquero la declaración de parques marinos, destinados a preservar los recursos existentes en un área determinada del mar, en los que estará prohibida la realización de cualquier actividad extractiva salvo aquellas que se autoricen con fines exclusivamente científicos.

Art. 38. — Anualmente, antes de que el Consejo Federal Pesquero determine las cuotas globales anuales por pesquería, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), hará público un informe, que tendrá carácter de dictamen vinculante sobre el estado de las reservas biológicas y los niveles de captura sostenibles.

## CAPÍTULO VII

### Investigación

Art. 39. — La Secretaría de Pesca aprobará anualmente, según las prioridades que establezca el Consejo Federal Pesquero (COFEPE), el plan de investigación y la asignación presupuestaria del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), atendiendo al cumplimiento de su función principal de evaluación de las capturas máximas sostenibles de las pesquerías argentinas.

Art. 40. — El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), podrá celebrar acuerdos con las provincias y contratos de locación de servicios con particulares. Los fondos eventualmente involucrados en estos acuerdos y contratos serán administrados por el INIDEP, pasando a formar parte de los recursos a que se refiere el artículo 6º de la ley 21.673.

Art. 41. — El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) utilizará y administrará los buques de investigación que el Estado nacional o los Estados provinciales le proporcionen, pudiendo asimismo contratar otros buques cuando ello sea necesario, previa autorización de la Secretaría de Pesca.

Art. 42. — El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) podrá embarcar observadores científicos en los buques pesqueros de bandera nacional, resarciendo a sus propietarios por los gastos de rancho correspondientes.

Art. 43. — La Secretaría de Pesca propondrá al Consejo Federal Pesquero (COFEPE) las autorizaciones para realizar contratos de pesca experimental, y extenderá

los correspondientes permisos. Podrán ser parte de los contratos con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras. La pesca experimental en ningún caso podrá tener una finalidad comercial, sólo podrá tener por propósito mejorar el conocimiento sobre la cuantía de los recursos explotables y experimentar con nuevas tecnologías de pesca.

Art. 44. — Será condición obligatoria para la autorización de campañas de pesca experimental que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) pueda designar observadores a bordo y tenga libre acceso a toda la información recolectada, en los términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la ley 20.489.

Art. 45. — Los fondos a los que se refieren los artículos 7º y 8º de la ley 20.489 pasarán a integrar los recursos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) establecidos en el artículo 6º de la ley 21.673.

## CAPÍTULO VIII

### Infracciones y sanciones

Art. 46. — Las infracciones a las disposiciones de la presente ley y normativa vigente en la materia serán sancionadas por el régimen que se establece en el presente capítulo conforme que las mismas sean cometidas por buques de pabellón nacional o extranjero.

Art. 47. — Las violaciones a las disposiciones contenidas en esta ley, a los reglamentos, a las resoluciones vigentes en la materia, o a los que se dicten como consecuencia de este cuerpo legal, por parte de personas físicas o jurídicas argentinas o extranjeras, serán reprimidas con las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que correspondan por violación de la ley penal o aduana aplicable:

- a) Multas;
- b) Suspensión por el lapso de un (1) mes a un (1) año la licencia de capitán o patrón;
- c) Revocación de la licencia de capitán o patrón;
- d) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- e) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- f) Decomiso del buque;
- g) Suspensión del permiso de pesca del buque;
- h) Revocación del permiso de pesca del buque;
- i) Suspensión de la cuota individual de pesca;
- j) Caducidad de la cuota individual de pesca;
- k) Suspensión por el plazo de cinco (5) años a la empresa propietaria o armadora del derecho a presentarse a licitar cuotas individuales de pesca;
- l) Inhabilitación especial por el plazo de diez (10) años a los socios, directores y gerentes de la empresa propietaria o armadora.

Art. 48. — Las sanciones serán de carácter acumulativo. Al momento de imponerse la sanción se tendrá en cuenta la reincidencia, los métodos utilizados para la



pescas, el número y tamaño de los buques intervinientes, las especies capturadas, su volumen y valor económico, así como también la conducta del capitán al tiempo de la detención del buque.

Art. 49. — A los fines de la reincidencia se considerará al armador, propietario o capitán con independencia del buque utilizado en la comisión de la infracción. Se considerará reincidente el armador, propietario o capitán que, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de la infracción hayan sido sancionados por otra infracción similar.

Art. 50. — La realización de actividades de pesca por parte de personas físicas o jurídicas argentinas o extranjeras que no sean titulares de cuotas individuales de pesca, en el Mar Territorial Argentino y la Zona Económica Exclusiva, declarados en veda, será sancionada con las siguientes penas, que tendrán carácter acumulativo, salvo lo dispuesto en el inciso e):

- a) Multa de doscientos mil dólares estadounidenses (u\$s 200.000), hasta un máximo de cuatro millones de dólares estadounidenses (u\$s 4.000.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- d) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- e) Decomiso del buque, en caso de no abonarse la multa establecida por aplicación del inciso a);
- f) Suspensión por el plazo de cinco (5) años a la empresa propietaria o armadora del derecho a presentarse a licitar cuotas individuales de pesca.

Art. 51. — La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en el artículo anterior, será sancionada con:

- a) Multa de entre doscientos mil dólares estadounidenses (u\$s 200.000) y cinco millones quinientos mil dólares estadounidenses (dólares 5.400.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón, si el capitán o patrón fuere reincidente se revocará su licencia;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- d) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- e) Decomiso del buque, en caso de no abonarse la multa establecida por aplicación del inciso a);
- f) Suspensión por el plazo de cinco (5) años a la empresa propietaria o armadora del derecho a presentarse a licitar cuotas individuales de pesca;
- g) Inhabilitación por el plazo de diez (10) años a los socios, directores y gerentes de la em-

presa propietaria o armadora, para desempeñarse como socios, administradores, directores, gerentes, síndicos, factores o apoderados con facultades generales, o fundadores de sociedades comerciales que se presenten en la licitación de cuotas individuales de pesca. Los socios directores y gerentes de la empresa propietaria o armadora quedarán inhabilitados por el mismo plazo a presentarse como personas individuales en la licitación de las cuotas individuales de pesca.

Art. 52. — La realización de actividades de pesca por parte de personas físicas o jurídicas que sean titulares de cuotas individuales de pesca, en el Mar Territorial Argentino y en la Zona Económica Exclusiva, declarados en veda, será sancionada con las siguientes penas, que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa de cien mil dólares estadounidenses (dólares 100.000), hasta un máximo de tres millones quinientos mil dólares estadounidenses (u\$s 3.500.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- d) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- e) Suspensión del permiso de pesca del buque de seis (6) meses a un (1) año;
- f) Suspensión de la cuota individual de pesca por un (1) año.

Art. 53. — La realización de las actividades de pesca por parte de personas físicas o jurídicas que sean titulares de cuotas individuales de pesca, con buque o buques que no posean permiso de pesca, en el Mar Territorial Argentino y en la Zona Económica Exclusiva, declarados en veda, será sancionada con las siguientes penas, que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa entre ciento treinta mil dólares estadounidenses (u\$s 130.000) y cuatro millones quinientos mil dólares estadounidenses (u\$s 4.500.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- d) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- e) Caducidad de la cuota individual de pesca;

Art. 54. — La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en los artículos 52 y 53, será sancionada con:

- a) Multa entre ciento treinta mil dólares estadounidenses (u\$s 130.000) y cuatro millones quinientos mil dólares estadounidenses (u\$s 4.500.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;

- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón, si el capitán o patrón fuere reincidente se revocará su licencia;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- d) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- e) Decomiso del buque, en caso de no abonarse la multa establecida por aplicación del inciso a);
- f) Revocación del permiso de pesca del buque si lo tuviere;
- g) Caducidad de la cuota individual de pesca;
- h) Suspensión por el plazo de cinco (5) años a la empresa propietaria o armadora del derecho a presentarse a licitar cuotas individuales de pesca;
- i) Inhabilitación por el plazo de tres (3) años a los socios directores y gerentes de la empresa propietaria o armadora, para desempeñarse como socios, administradores, directores, gerentes, síndicos, factores o apoderados con facultades generales, o fundadores de sociedades comerciales que se presenten en la licitación de cuotas individuales de pesca. Los socios directores y gerentes de la empresa propietaria o armadora quedarán inhabilitados por el mismo plazo a presentarse como personas individuales en la licitación de las cuotas individuales de pesca.

Art. 55. — La realización de actividades de pesca por parte de personas físicas o jurídicas argentinas o extranjeras, sin ser titulares de cuotas individuales de pesca, o para especies no autorizadas en la respectiva cuota, o en zonas no autorizadas siendo titular de una cuota individual, en el Mar Territorial Argentino y en la Zona Económica Exclusiva, será sancionado con las siguientes penas, que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa de cien mil dólares estadounidenses (u\$s 100.000), hasta un máximo de tres millones quinientos mil dólares estadounidenses (u\$s 3.500.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- d) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- e) Suspensión de tres (3) meses a un (1) año del permiso de pesca del buque.

Art. 56. — La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas por el artículo anterior, será sancionada con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa de ciento treinta mil dólares estadounidenses (u\$s 130.000), hasta un máximo de cuatro millones quinientos mil dólares estadounidenses (u\$s 4.500.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;

- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- d) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- e) Decomiso del buque, en caso de no abonarse la multa establecida por aplicación del inciso a);
- f) Suspensión de cuatro (4) meses a dos (2) años del permiso de pesca del buque;
- g) Suspensión por el plazo de cinco (5) años a la empresa propietaria o armadora del derecho a presentarse a licitar cuotas individuales de pesca.

Art. 57. —

1º) El titular de una cuota individual que supere el monto de captura autorizado en un año calendario en más de un dos por ciento (2 %), será reprimido con las siguientes penas, las que tendrán carácter acumulativo:

- a) Deducción del doscientos por ciento (200 %) del exceso incurrido, en el año calendario inmediatamente siguiente;
- b) Suspensión de seis (6) meses a un (1) año de los permisos de pesca de todos los buques de la flota;
- c) Suspensión por el término de un (1) año de la cuota individual de pesca.

2º) Cuando la captura en exceso de lo autorizado por la cuota individual para un año calendario no supere el uno por ciento (1 %) se considerará como margen de tolerancia.

3º) Cuando el exceso fuera del uno (1) al dos (2) por ciento el titular de la cuota individual podrá:

- a) Imputarlo a la cuota individual de la misma especie de otro titular;
- b) Imputarlo a la cuota individual de otra especie, según los valores de conversión que en función de los respectivos precios establezca la Secretaría de Pesca.

4º) Si el titular de una cuota individual de pesca no hiciera uso del total de lo autorizado en un año calendario, no podrá imputar el remanente al año siguiente.

Art. 58. — La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en el inciso 1º del artículo anterior, será sancionada con las siguientes penas, que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa, por el cuatrocientos por ciento (400 %) del valor del excedente autorizado a capturar, calculado a precios de mercado internacional;
- b) Revocación del permiso de pesca a los buques de la flota que hubieren sido suspendidos por las infracciones descritas en el artículo 56 inciso 3) y suspensión de seis (6) meses a dos (2) años de los permisos de pesca de los buques que no integraban la flota, al momento de la comisión de la infracción que ahora se reitera;
- c) Caducidad de la cuota individual de pesca;

d) Suspensión por el plazo de cinco (5) años a la empresa propietaria o armadora del derecho a presentarse a licitar cuotas individuales de pesca.

Art. 59. — Las capturas de una especie, en calidad de fauna acompañante de una especie principal, superiores a lo autorizado por la cuota individual de pesca, y la reincidencia en la comisión de esta infracción, serán consideradas del mismo modo que si se tratara de la especie principal, aplicándose lo previsto en los artículos 56 y 57 respectivamente.

Art. 60. — El que violare las prohibiciones establecidas por el artículo 32, incisos a), b), c), d) y f), será sancionado con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa de cien mil dólares estadounidenses (u\$s 100.000), hasta un máximo de un millón de dólares estadounidenses (u\$s 1.000.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- d) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- e) Suspensión de un (1) mes a seis (6) meses del permiso de pesca del buque.

Art. 61. — La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas por el artículo anterior, será sancionada con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa de ciento treinta mil dólares estadounidenses (u\$s 130.000), hasta un máximo de un millón trescientos mil dólares estadounidenses (u\$s 1.300.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- d) Decomiso de las artes y equipos de pesca utilizados para cometer la infracción;
- e) Revocación del permiso de pesca del buque;
- f) Suspensión por el término de un (1) año de la cuota individual de pesca.

Art. 62. — Realizar actividades pesqueras con un buque que no cuente con permiso de pesca o autorización de arrendamiento para el caso contemplado en el artículo 17, será sancionado con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa de cincuenta mil dólares estadounidenses (u\$s 50.000), hasta un máximo de un millón de dólares estadounidenses (u\$s 1.000.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado.

Art. 63. — La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas por el artículo anterior, será sancionada con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa de cien mil dólares estadounidenses (u\$s 100.000), hasta un máximo de un millón trescientos mil dólares estadounidenses (u\$s 1.300.000). El armador y el propietario del buque serán solidariamente responsables del pago de la multa;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso de la captura, sustituible por el pago de la captura a valor del mercado;
- d) Suspensión por el término de un (1) año de la cuota individual de pesca.

Art. 64. — El armador que no cumpliera con las obligaciones establecidas en el artículo 24 de la presente ley o informare volúmenes de captura inferiores a las reales, será sancionado con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa del doscientos por ciento (200 %) del valor comercial de lo no declarado, calculado al precio en el mercado internacional;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso de la captura no declarada, sustituible por el pago de la captura no declarada a valor del mercado.

Art. 65. — La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas por el artículo anterior, será sancionada con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa del cuatrocientos por ciento (400 %) del valor comercial de lo no declarado, calculado al precio en el mercado internacional;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso del total de la captura, sustituible por el pago de la captura total a valor del mercado;
- d) Suspensión de un (1) mes a un (1) año del permiso de pesca del buque.

Art. 66. — La multirreincidencia en la comisión de las infracciones previstas por el artículo 63, será sancionada con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa del seiscientos por ciento (600 %) del valor comercial de lo no declarado, calculado al precio en el mercado internacional;
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- c) Decomiso del total de la captura, sustituible por el pago de la captura total a valor del mercado;
- d) Revocación del permiso de pesca del buque;
- e) Suspensión de un (1) año de la cuota individual de pesca.

Art. 67. — El no cumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión para la realización de las

actividades de acuicultura, dará lugar a una multa equivalente hasta dos veces el valor comercial del stock de peces.

Art. 68. — Realizar actividades de pesca artesanal sin estar inscrito en el registro respectivo, será sancionado con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- b) Multa de cinco mil dólares estadounidenses (u\$s 5.000), hasta un máximo de cien mil dólares estadounidenses (u\$s 100.000);
- c) Decomiso de la captura sustituible, por el pago de la captura a valor de mercado.

Art. 69. — La reincidencia en la comisión de la infracción prevista por el artículo anterior, será sancionada con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Suspensión de la licencia de capitán o patrón;
- b) Multa de diez mil dólares estadounidenses (u\$s 10.000), hasta un máximo de doscientos mil dólares estadounidenses (u\$s 200.000);
- c) Decomiso de la captura sustituible, por el pago de la captura a valor de mercado.

Art. 70. — Realizar capturas de peces de pequeño tamaño en relación al standard de la especie, será sancionada con las siguientes penas que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa de diez mil dólares estadounidenses (u\$s 10.000), hasta un máximo de doscientos mil dólares estadounidenses (u\$s 200.000);
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón.

Art. 71. — Arrojar especies con valor comercial al mar será sancionado con las siguientes penas, que tendrán carácter acumulativo:

- a) Multa de diez mil dólares estadounidenses (u\$s 10.000), hasta un máximo de doscientos mil dólares estadounidenses (u\$s 200.000);
- b) Suspensión de la licencia de capitán o patrón.

Art. 72. — Salvo prueba en contrario, se presume que las capturas que se hallen a bordo de un buque que se encuentre en los espacios marítimos argentinos sin contar con autorización expresa, han sido aprehendidas en dichos espacios.

Art. 73. — Cuando las infracciones descritas en los artículos anteriores fueren cometidas por buques de pabellón extranjero, las sanciones previstas serán aplicadas por la Prefectura Naval Argentina, previo sumario que asegure el derecho de defensa. Dicha autoridad marítima podrá disponer, además, la retención de la embarcación extranjera en puerto argentino hasta que se haga efectivo el pago de la multa o se constituya fianza u otra garantía suficiente si fuera el caso.

Art. 74. — Las sanciones aplicadas por la Prefectura Naval Argentina podrán ser apeladas por ante la cámara federal competente, dentro de los cinco (5) días

hábiles contados a partir de la notificación, previo pago o cumplimiento.

Art. 75. — Cuando las infracciones descritas en esta ley, las violaciones a los reglamentos, resoluciones vigentes en la materia o a los que se dicten como consecuencia de este cuerpo legal, fueren cometidas por buques de pabellón nacional, las sanciones previstas serán aplicadas por la Secretaría de Pesca, y procederán previo sumario que asegure el derecho de defensa y valore la naturaleza de la infracción y el perjuicio causado. Todo ello sin perjuicio de las sanciones que correspondan por violación de la ley penal o aduanera aplicable.

Art. 76. — Las sanciones impuestas por la Secretaría de Pesca podrán ser recurridas dentro de los cinco (5) días hábiles de notificadas y previo depósito del importe correspondiente si se tratase de multas, mediante recurso de reconsideración y apelación en subsidio.

Art. 77. — Este recurso se deducirá fundadamente frente a la misma Secretaría de Pesca, la que deberá resolverlo dentro de los sesenta (60) días contados desde la fecha de su interposición. Si la resolución fuere confirmatoria de la sanción impuesta, notificado que sea el infractor se remitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a la cámara nacional de apelaciones que corresponda, según las leyes que determinen la competencia.

Art. 78. — La autoridad de aplicación podrá interrumpir el viaje de pesca en los casos en que la gravedad de la situación detectada lo justifique.

Art. 79. — Cuando el transgresor de esta ley y sus normas reglamentarias sea una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración, gerencia o fiscalización de la misma, y en su caso el capitán o patrón de buque, que hubiera intervenido en la comisión del hecho, serán personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en esta ley y de las restantes consecuencias derivadas del hecho ilícito.

Art. 80. — Las acciones para imponer sanción por infracción a esta ley y sus normas reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años. El término para la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la comisión de la infracción.

Art. 81. — Sin perjuicio de las sanciones administrativas que se establecen en esta ley será considerado incurso en el delito previsto por el artículo 248 del Código Penal el capitán o patrón de buque pesquero de pabellón nacional que omita el cumplimiento de las obligaciones previstas en el inciso b) del artículo 122 de la ley 20.094.

## CAPÍTULO IX

### Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 82. — A partir de la vigencia de la presente ley, los beneficiarios de permisos de pesca otorgados en virtud del régimen anterior, deberán acreditar en un plazo no mayor de sesenta (60) días, ante la autoridad competente, que el buque objeto del permiso se encuentra debidamente encuadrado en las condiciones de navegabilidad, matriculación y demás circunstancias a que hace referencia el artículo 18 de la presente ley.

Art. 83. — Los beneficiarios de permisos de pesca otorgados en virtud del régimen anterior, deberán acreditar ante la Secretaría de Pesca, en un plazo no mayor de sesenta (60) días, haber cumplimentado todas las condiciones establecidas en el proyecto en virtud del cual se otorgó ese permiso.

Art. 84. — Los adjudicatarios de cuotas individuales de pesca de conformidad con el régimen establecido por la presente ley deberán manifestar en forma expresa, previo al otorgamiento de la titularidad de la cuota individual, que ejercen la opción de acogerse a los beneficios de la presente, renunciando a los beneficios que les concedía el permiso otorgado con motivo del régimen anterior.

Art. 85. — En la primera adjudicación de cuotas individuales de pesca el cincuenta por ciento (50 %) de las cuotas globales se otorgarán sin cargo y el restante cincuenta por ciento (50 %) mediante el régimen normal de licitación pública.

Art. 86. — Para la asignación sin cargo a que hace referencia el artículo 85, será requisito ser titular de un permiso de pesca en vigencia. A los fines de la adjudicación, se aplicará una fórmula que pondere el capital invertido en plantas de procesamiento en tierra, el capital invertido en buques y el promedio de captura de la especie principal de la pesquería en los tres años anteriores a la sanción de esta ley, según lo establezca el decreto reglamentario.

Art. 87. — Los arrendamientos de buques caducarán en forma automática al vencer el término de su vigencia o al concluir el plazo de tres (3) años estipulado en el régimen establecido por el decreto 1.493/92, el que primero acaezca, sin posibilidad de renovación.

Art. 88. — A los efectos de dar cumplimiento a los artículos 85 y 86 no se podrán considerar los depósitos de frío y los depósitos de repuestos como parte de las plantas en tierra. Cuando en los tres (3) años anteriores a la sanción de esta ley, las plantas hubieran estado inactivas más de un sesenta por ciento (60 %) del tiempo, no podrán ser consideradas en el cálculo.

Art. 89. — La presente ley tendrá vigencia a partir de los 180 días de su promulgación.

Art. 90. — El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor de 180 días de su promulgación.

Art. 91. — Las disposiciones de la presente ley rigen sin perjuicio de los derechos y obligaciones que en la materia objeto de la misma correspondan a la República Argentina, en virtud de los tratados internacionales de los cuales es parte.

Art. 92. — Invítase a las provincias con litoral marítimo a adherir al régimen de la presente ley.

Art. 93. — Hasta tanto sea celebrado el tratado que contempla el artículo 59 de la ley, la Secretaría de Pesca de la Nación se desempeñará como autoridad de aplicación en materia de pesca, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

Art. 94. — Quedan derogadas todas las disposiciones que por leyes o decretos que se opongan a la presente ley.

Art. 95. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan I. Melgarejo. — Leopoldo R. G. Moreau.

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Elevamos a consideración de la Honorable Cámara el presente proyecto de ley de pesca marítima, con el que se pretende alcanzar un régimen regulatorio, más efectivo para la actividad, por lo tanto más acorde con el grado de explotación pesquera alcanzado hasta el presente, y al mismo tiempo brindar un régimen de seguridad jurídica a todos los involucrados.

La actividad pesquera en nuestro país en particular y en el mundo en general, ha llegado a un límite de saturación tal, que ya muchas especies de gran valor se consideran comercialmente extinguidas, si bien biológicamente aún sobreviven. La flota pesquera mundial, duplica en capacidad extractiva las posibilidades reproductivas de las pesquerías.

La Argentina, desde hace muchos años se debate entre políticas pesqueras improvisadas, una legislación inadecuada que básicamente tiende al fomento y desarrollo de la pesca, precisamente cuando el recurso está en franco retroceso y la incapacidad manifiesta de un control adecuado de su litoral marítimo. La conjunción de estos y otros factores, ha determinado que rápidamente se haya alcanzado el tonelaje máximo que pueda extraerse de la Zona Económica Exclusiva y que los niveles de captura hayan comenzado a declinar peligrosamente en los últimos años, por agotamiento de los stocks.

El proyecto dispone en su artículo 59, que el CO-FIPE (Consejo Federal Pesquero), será la autoridad de aplicación de la presente ley. Creemos necesario destacar que el procedimiento elegido para su conformación, queda reservado exclusivamente a las provincias con litoral marítimo y a la Nación, quienes conjuntamente decidirán la instrumentación del mismo, en cuanto a su objeto, estructura orgánica, composición, competencias, etcétera. Este procedimiento, que se inscribe dentro de un verdadero federalismo de concertación, y que reconoce su espíritu en el artículo 124 de la Constitución Nacional, permitirá vertebrar de manera definitiva los intereses, muchas veces contrapuestos entre la Nación y las provincias, al brindar una herramienta para la solución de potenciales conflictos interjurisdiccionales. Creemos que la puesta en práctica de mecanismos institucionales como el propuesto, constituciones que se ha producido desde 1991, éstas han sobreestructurarse, dejando atrás décadas de ineficiencia y centralismo.

El régimen de pesca industrial contemplado en el capítulo IV implica un cambio completo respecto de la actualmente vigente y se fundamenta en el hecho de que, aunque la opinión pública no ha tomado aún plena conciencia de la notable expansión de las capturas que se ha producido desde 1991, estas han sobrepasado el doble del promedio histórico de la década pasada. De este modo, la situación que actualmente prevalece en las pesquerías de mayor valor comercial es una intensa explotación, que en algunos casos presenta inquietantes evidencias de que se han sobrepasado

sado los límites de sustentabilidad biológica a largo plazo. Las implicancias de este notable aumento de las capturas para la problemática pesquera son que el eje de la cuestión se haya desplazado de la promoción de la actividad al control de las capturas, así como que complementariamente se plantee la necesidad de aumentar los recursos dedicados a la investigación biológica de las pesquerías y al control de la actividad de los buques de naciones no ribereñas.

Un planteo como el anterior implica un reconocimiento de que hemos dejado atrás la correcta percepción que prevalecía en la década pasada de ser un país rico en recursos pesqueros que no se aprovechaban por falta de explotación suficiente. Pero este mismo reconocimiento de una nueva realidad obliga a asumir la necesidad de cambiar el régimen que regulaba aquella subexplotación por otro adaptado a las circunstancias actuales. Del mismo modo obliga a reconocer la necesidad de que el nuevo régimen sirva asimismo para administrar otras pesquerías, en las que no habiéndose evidenciado aún un interés por su explotación comercial, bien podrían ser objeto de una promoción inteligentemente diseñada.

La necesidad de regular la explotación de los recursos del mar ha sido reconocida universalmente y se asienta en la existencia de una clásica falla de mercado, como es la propiedad común del recurso. Esta ausencia de propiedad sobre el stock pesquero no capturado hace que la conservación no pueda lograrse de un modo espontáneo, ya que toda coordinación de conductas para conservar el recurso implica una forma de inversión no apropiable. Es por ello que a medida que el esfuerzo de pesca aumenta, se incrementa paralelamente el incentivo para capturar la renta presente, siguiendo así un camino que lleva inexorablemente a la depredación y a la existencia de recursos ociosos que terminan planteando graves problemas de reconversión.

Es por eso que la intervención del Estado para regular el esfuerzo pesquero es una función irremplazable que reconoce distintas modalidades en una pauta común de evolución.

En los países donde la explotación de los recursos marinos siguió una trayectoria ascendente, el régimen regulatorio transitó el mismo sendero que las circunstancias han ido imponiendo en el nuestro. Inicialmente la regulación del esfuerzo pesquero se realizó de modo indirecto, mediante permisos de pesca concedidos a los buques y regulaciones sobre las tecnologías empleadas, que tendían a limitar el esfuerzo de pesca potencialmente aplicable. Al avanzar el grado de explotación, se pasó a medidas de control directo de las capturas mediante el establecimiento de cuotas globales, que daban lugar a cierres de temporada y vedas temporales de pesca al alcanzarse el límite establecido por la autoridad pesquera. Este último enfoque del control, por su parte, evolucionó en función de la experiencia desde las cuotas globales a las individuales, como consecuencia del efecto no deseado que tienen las primeras, de desatar una "carrera por pescar" que atenta contra la discriminación en las capturas y crea un círculo vicioso que lleva a la depredación.

En nuestro país, habiéndose llegado en 1995 a un récord de más de 1,1 millón de toneladas, se ha hecho

más urgente aplicar medidas de control de carácter directo, para lo cual la disyuntiva es avanzar en la aplicación de cuotas globales y correr el riesgo de repetir la experiencia negativa de otros países al respecto, o bien adoptar un régimen de cuotas individuales. En la actualidad catorce países en el mundo aplican total o parcialmente regímenes de cuotas individuales que, al otorgar una forma de derecho de propiedad sobre el stock futuro, establecen un incentivo a las conductas conservacionistas que permite la reconciliación del interés individual con el de la sociedad.

Surge del análisis de estas experiencias que los regímenes de cuotas individuales, sobre todo cuando son transferibles y dan lugar al surgimiento de mercados secundarios, tienen una enorme potencialidad para inducir conductas acordes con la explotación racional del recurso, entre las que cabe mencionar a las siguientes:

a) Al ser un activo que las empresas incluyen en sus balances, cuando están definidas como un porcentaje fijo sobre la cuota global del año, todo aumento del stock pescable se traducirá en un incremento patrimonial y toda reducción en una pérdida, alentando así a exigir una mayor efectividad de los controles y a denunciar violaciones;

b) Al eliminarse la rivalidad por el recurso que surge de la posibilidad de cierres de temporada y vedas, la actividad extractiva puede tomarse con calma, dirigiendo el esfuerzo de pesca hacia las zonas donde están los ejemplares adultos, que son los que permiten maximizar el ingreso cuando existe una limitación cuantitativa a la captura;

c) Dado que el Estado puede intervenir en el mercado secundario de cuotas comprando o vendiendo cuotas para regular el esfuerzo de pesca, se hace posible tener la flexibilidad necesaria para adecuarse a los imprevistos de carácter biológico o comercial que puedan surgir durante las temporadas;

d) Dado que las cuotas individuales son un activo más realizable que el permiso de pesca concedido a un buque, se facilitan los préstamos bancarios y se evita que la liquidación en los procesos de quiebra quede trabada por las demoras en la venta de buques con permiso;

e) Finalmente, en las pesquerías poco explotadas se hace posible promocionar su pleno aprovechamiento, ya que al asignar de una sola vez derechos de pesca se incentiva el interés empresario. Es así que quienes no se decidan a participar de las licitaciones correspondientes corren el riesgo de tener que comprar luego su entrada a quienes lo decidieron a tiempo.

No obstante las diferencias existentes entre la regulación mediante cuotas globales e individuales, ambas tienen en común la necesidad de ejercer un estricto control de los desembarcos y una mayor investigación de los montos de captura sostenibles, lo cual en un marco de estrechez de los recursos impositivos y múltiples necesidades sociales no atendidas resulta incompatible con su financiamiento por toda la comunidad. Esta necesidad se suma al problema de la asignación no arbitraria de estas cuotas, para hacer aconsejable que se realice mediante licitaciones que consideren como criterio adjudicatorio la mejor oferta del pago de un ca-

non anual de pesca. De este modo no sólo se obtendrían recursos para asegurar a las generaciones futuras la intangibilidad del recurso sino que se introduciría en un sector que tradicionalmente no se caracterizó por la transparencia de los procedimientos un método de asignación impersonal y automático.

Una particularidad importante del régimen propuesto es que las cuotas de pesca sean asignadas a las personas físicas o jurídicas y no a los buques de su propiedad, ya que esto permitiría una mayor flexibilidad y transparencia en la administración pesquera. Ello facilitaría también que parte de la flota argentina, especialmente aquella de capitales nacionales, pudiera renovar sus unidades sin pasar por trámites burocráticos, y que se independizara el valor del buque, del de su permiso de pesca. De ese modo se rompería el círculo vicioso originado en el régimen de acceso al mercado pesquero que, al estar asentado en el otorgamiento restrictivo de un permiso gratuito, temporalmente indefinido y a un buque en particular dio lugar a una tradicional falta de transparencia en los trámites, a comportamientos rentísticos, a la obsolescencia del capital más antiguo, a riesgo de sobrepesca de las especies más valiosas y a la falta de recursos presupuestarios para mejorar el conocimiento del stock pesable y el control del mar territorial.

Paralelamente a este régimen se establece en el capítulo V, un régimen distinto para la pesca artesanal que, atendiendo al grado de explotación alcanzado en las pesquerías costeras y a la magnitud económica de esas explotaciones, las pone al margen del establecimiento de cuotas individuales de captura y por consiguiente del pago de cánones de pesca. Para ello se establecen las previsiones destinadas a impedir la desvirtuación del régimen, definiendo el tipo de embarcaciones y el carácter de sus titulares, así como también disposiciones que permitan establecer medidas de conservación cuando existieran evidencias firmes de fuerte explotación.

Se añade a lo anterior que el régimen actual está definido fundamentalmente por normas de jerarquía inferior a la ley, lo cual resulta incompatible con la seguridad jurídica que requiere hundir capitales en esta actividad con criterio de largo plazo.

Un punto contemplado con especial cuidado en la ley es el de las plantas de procesamiento en tierra. El mismo régimen de onerosidad establecido para adquirir el derecho a acceder a una cuota individual de pesca, contiene un incentivo para que las empresas procuren recuperar rentas, agregando valor a la captura. No obstante esto, se ha procurado reforzar el incentivo introduciendo algunas disposiciones especiales. La primera es que en la asignación inicial del 50 % de las cuotas individuales en forma gratuita y en base a antecedentes de posesión de plantas de procesamiento en tierra, otorgue un mayor puntaje. La segunda es habilitar a las empresas con dichas plantas a licitar cuotas individuales sin poseer buques, mediante el arrendamiento temporario de buques extranjeros o la contratación de buques nacionales, con permiso de pesca. La tercera y última es equiparar el personal operativo de las plantas de procesamiento en tierra al personal embarcado de naciona-

lidad argentina, permitiendo que se deduzca del pago del canon el 15 % de los sueldos y salarios abonados. De este modo el nuevo régimen no sólo innova en la regulación de la etapa primaria de la actividad, sino también en la industrial, al establecer incentivos a su recuperación y expansión.

Al establecerse en el presente proyecto, en el capítulo VIII el régimen de infracciones y sanciones, se prestó particular atención a la determinación de una escala axiológica de los bienes jurídicos tutelados, para la adecuada graduación de las sanciones, en procura de una solución dialéctica cuando hubiere intereses y valores contrapuestos en juego.

Para ello, se tuvo en cuenta que esta ley es, además de regulatoria de la actividad pesquera, fundamentalmente proteccionista de recurso natural en explotación, que por su calidad de renovable, es particularmente sensible a sufrir graves alteraciones biológicas que pueden llevarlo a su completa extinción. Debido a este peligro, su explotación comercial, se debe realizar en un marco de estricta planificación y control, a fin de preservar su sustentabilidad en el tiempo.

Otro aspecto negativo para la conservación de recurso, y que se trata de erradicar a través de la presente ley, es la lentitud en incorporar los conocimientos científicos y técnicos que van generando los organismos de investigación y que constituyen una base sólida para introducir rápidas modificaciones en los planes pesqueros, a la luz de la nueva información.

También, a través de esta ley, se procura evitar mediante una planificación adecuada de la actividad, que factores económico-financieros coyunturales, distorsionen los programas de explotación y comprometan el futuro pesquero del país.

A efectos de revertir esta situación, recuperar los niveles poblacionales anteriores, evitar la pesca furtiva, la depredación y el uso de artes y equipos de pesca destructivos, así como la violación de las vedas, los reglamentos y el falseamiento de la información, se han establecido severas sanciones para los infractores, las que rigurosamente aplicadas, permitirán la preservación de la población icológica, para usufructo de las generaciones presentes y futuras.

Por los motivos precedentemente señalados, los que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.

*Juan I. Melgarejo. — Leopoldo R. G. Moreau.*

La Secretaría informa que hay dictamen en minoría y hay disidencias.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Ludueña. — (Lee) Señor presidente, señores senadores: nuevamente nos encontramos reunidos en este recinto a fin de tratar una ley que organice globalmente la actividad pesquera de nuestro país.



Tal como expusiéramos en los fundamentos del proyecto que presentamos con el senador Mac Karthy, y a pesar de la importante labor desplegada por esta Honorable Cámara, que permitió en 1991 la sanción por el cuerpo de un plexo normativo moderno y adecuado a las necesidades del momento, razones por todos conocidas impidieron su transformación en ley, produciéndose su caducidad en la Cámara de Diputados.

Ante estas circunstancias, durante 1994, al igual que otros senadores, solicité se reprodujera el dictamen aprobado por el Senado durante 1991.

La renovación de los miembros de esta Cámara y otras urgencias del país impidieron que la Comisión de Pesca se expidiera sobre los proyectos que se pusieron a su consideración en los tiempos previstos por el Reglamento del cuerpo.

Es así como arribamos al inicio de las sesiones ordinarias del corriente año, oportunidad que es aprovechada por quien les habla para presentar nuevamente un proyecto de ley de pesca, juntamente con el señor senador Mac Karthy.

Nuestro trabajo reproduce en esencia el dictamen de 1991, aunque incluye algunas modificaciones tendientes a receptar los cambios, tanto de orden fáctico como jurídico, producidos en nuestro país en dicho lapso.

En tal sentido, los señores senadores deben tener presente que entre 1991 y 1995 se sancionó la ley de puertos —número 24.093—, la ley ratificatoria de la Convención de Montego Bay —número 24.543— y el decreto de necesidad y urgencia número 817/92, que modifica el régimen laboral abocado de los buques pesqueros.

La actividad legislativa mencionada precedentemente ha tenido significativa influencia sobre el marco legal en el que se ha de desenvolver la actividad pesquera en el futuro.

La pesca, cuyo origen es tan antiguo como la humanidad, en nuestro país se encuentra regulada por las leyes 17.094, 17.500, 18.502 y 20.136; todas ellas dictadas al calor de las necesidades del momento, tanto de orden interno como externo; los profundos cambios operados en nuestra economía, así como el avance tecnológico experimentado por el sector, han puesto de manifiesto la obsolescencia de las normas citadas y la imperiosa necesidad de un régimen legal acorde con las circunstancias fácticas.

Todos estos antecedentes, sucintamente transcritos, han sido tenidos en cuenta a fin de

elaborar el dictamen que hoy sometemos a consideración de este honorable cuerpo y que creemos gozará de mejor suerte en la Cámara de Diputados, toda vez que el mismo refleja las inquietudes expresadas en las conclusiones de las Primeras Jornadas Parlamentarias de Intereses Marítimos, que aquélla organizara.

Sin pretender efectuar un análisis pormenorizado del articulado de la norma en debate, que será motivo del tratamiento en particular de cada uno de los preceptos que la conforman, a continuación destacaré sus aspectos más salientes.

En la primera norma del proyecto de ley hemos tratado de reflejar en forma amplia aspectos genéricos vinculados a esta actividad y la necesidad de que la misma se desarrolle sobre la base de sustentabilidad del recurso, teniendo como principal finalidad atender al bien común de todos los argentinos, debiendo su desarrollo servir tanto a los intereses del sector empresario como al de los trabajadores, así como también a las comunidades donde se radica.

En materia de jurisdicción y dominio, tomando como punto de partida la ley 24.638, de Línea de Base, y la ley 24.543, que ratifica la Convención de Montego Bay, en tanto y en cuanto definen el alcance de términos tales como aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva, alta mar, etcétera, hemos establecido la pertenencia y el manejo exclusivo de los recursos existentes en las aguas interiores y el mar territorial en cabeza de las provincias, reconociendo en forma expresa derechos que históricamente les han pertenecido y que la confusión existente en la materia llevó a pretender negarles.

En el ámbito de la zona económica exclusiva hemos establecido la jurisdicción y el dominio compartido del recurso entre las provincias del litoral marítimo y la Nación. A fin de arribar a esta solución hemos tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 de la Convención de Montego Bay y lo preceptuado por la ley 24.093, que establece la transferencia de los puertos nacionales al ámbito provincial, siendo estos Estados los que tienen que crear y sostener la infraestructura portuaria, de cuya existencia depende el desarrollo de la actividad.

Con relación al ejercicio de la jurisdicción argentina más allá de la milla doscientos, dada la particular naturaleza de dicho accionar, vinculado estrechamente a las relaciones que nuestro país debe mantener con terceros Estados que pescan en dichas áreas consideradas como alta

mar, hemos estimado conveniente que sea la Nación, a través del gobierno central, la que represente los intereses argentinos, solución, por otra parte, que tiene sustento constitucional en virtud de la delegación de facultades que en materia de relaciones exteriores han efectuado las provincias.

En este punto, la sanción de este proyecto dará el marco jurídico de derecho interno adecuado a la intensa actividad desplegada por nuestro país en el ámbito internacional, la que se ha traducido en la elaboración del proyecto de Convención para la Explotación de las Poblaciones de Peces Altamente Migratorias que se desplazan desde la zona económica exclusiva a la alta mar y viceversa, juntamente con los países que integran el denominado "Core Group" —del que formamos parte— y la suscripción del acuerdo sobre la aplicación de disposiciones para la conservación y ordenación de las poblaciones transzonales adoptado en el marco de la Convención del Mar.

A fin de ejercer los derechos consagrados por la norma en debate, en el capítulo IV se crea un Consejo Federal Pesquero. Se recogen en él las propuestas de los señores senadores que integran la comisión y el reclamo de las provincias patagónicas, otorgándose preeminencia a los representantes de los estados provinciales con litoral marítimo.

En materia de autoridad de aplicación, en el ámbito del gobierno nacional se crea la Secretaría de Pesca. Este organismo deberá ejercer la mayoría de las facultades que se le otorgan, con la aprobación o ratificación de los miembros del Consejo. De esta forma se da contenido cierto a los principios federales consagrados por la norma y se generan mecanismos de control que transparenten el accionar de los organismos gubernamentales.

Otro aspecto fundamental que contempla la presente ley es el de la investigación —capítulo V—, en sus dos vertientes. Una es la referida a la investigación aplicada, mediante la cual se deben determinar las capturas máximas permisibles por especie; para ello será necesario un inventario permanente de la fauna ictícola. La otra vertiente es la referida a la investigación científico-técnica, que es la encargada de incursionar en el desarrollo de los especímenes y de sus poblaciones, el estado sanitario, la movilidad, las migraciones y sus causas, los aspectos oceanográficos, etcétera.

En el proyecto se destaca el papel que se le asigna al Instituto Nacional de Investigación y

Desarrollo Pesquero —INIDEP—, a fin de lograr una adecuada evaluación y conservación del recurso ictícola.

La conservación, protección y administración de los recursos vivos del mar —Capítulo VI— tienen por objeto, como la ley lo indica, evitar excesos de explotación y evitar efectos dañinos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico. Esto permitirá un rendimiento óptimo constante de los recursos vivos del medio acuático.

En este aspecto debemos tener presente que el uso de nuestros derechos sobre los recursos vivos existentes en la zona económica exclusiva debe ser medido y responsable. Hemos asumido frente a la comunidad internacional obligaciones intransferibles en esta materia a partir de la firma y ratificación de Montego Bay, en nuestro carácter de Estado ribereño.

No puedo dejar de resaltar que la Convención citada, elaborada luego de largos años de debate e intensos trabajos diplomáticos, reconoce en su artículo 56, inciso primero, que los Estados ribereños tienen derechos de soberanía para los fines de exploración, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos. En el inciso segundo de dicho artículo se establece la obligación de respetar los derechos y deberes de los demás Estados. También se dispone en forma precisa y terminante —en los artículos 61 y 62— que los titulares de este derecho deben ejercerlo en forma óptima, de manera tal de garantizar la preservación del recurso.

Lo indicado precedentemente, aunado a la obligación del Estado ribereño que no posea capacidad de captura de dar acceso a terceros Estados hasta las capturas máximas permisibles, destaca la existencia de un nuevo concepto de soberanía, propio del fin del milenio y de los procesos de globalización del mundo.

El proyecto que nos ocupa pone de relieve los aspectos vinculados con el control y patrullaje dentro de los espacios marítimos sometidos a nuestra jurisdicción. En tal sentido, somos conscientes de que la conservación del recurso depende, en gran medida, de la efectividad de estas medidas, que se ven seriamente dificultadas por nuestra generosa geografía, que requiere de fuertes inversiones en equipamiento para permitir abarcar sus dilatados espacios.

Sobre este tópico, juntamente con quien me ha acompañado en la elaboración de este proyecto, introdujimos algunas modificaciones en el artículo 53, que fuera sancionado en 1991, a fin

de receptar lo normado por la Convención de Montego Bay.

Como pudieron apreciar los señores senadores en oportunidad de debatirse en este recinto la sanción de la ley 24.543, la Convención mencionada consagra en su artículo 58 las denominadas libertades de navegación, sobrevuelo y tendido de cables y tuberías submarinas, de las que gozan todos los Estados en la zona económica exclusiva, sean ribereños o no. Así, se establece en el inciso tercero la facultad de estos últimos de reglamentar el ejercicio de ese derecho.

Dicha potestad regulatoria debe ser ejercida en forma compatible con las distintas partes que integran la Convención. El alcance de esta facultad fue motivo de los interesantes debates durante el desarrollo de la Tercera Conferencia de Derechos del Mar, fundamentalmente cuando debió tratarse la navegación de los buques pesqueros pertenecientes a terceros Estados en la zona económica exclusiva.

Lo indicado ha planteado el problema básico de conjugar el derecho a la pesca del Estado ribereño en su zona económica exclusiva con el reconocimiento de la libertad de navegación en aquélla por parte de los buques pesqueros pertenecientes a terceras naciones.

Los arduos debates producidos en la materia y la doctrina internacional ponen de manifiesto la necesidad de reglamentar esta cuestión de forma expresa, estableciendo en qué condiciones se desarrollará el fenómeno navegatorio dentro de las doscientas millas por parte de los pesqueros extranjeros, sin afectar la libertad que la convención les otorga.

El especialista William T. Burke ha sostenido que la cuestión es adecuar el establecimiento de derechos de pesca exclusivos y la jurisdicción con el mantenimiento continuado de la libertad de navegación, debiendo conciliarse los intereses del Estado ribereño y los de la navegación a través del reconocimiento a ese Estado de una autoridad limitada para afectar a la navegación con medidas de control que guarden la debida razonabilidad.

Estas cuestiones y sus gravosas implicancias ponen de manifiesto la necesidad de sancionar el plexo normativo puesto a consideración de los señores senadores, atento a la orfandad que en esta cuestión presenta nuestro ordenamiento vigente y que nos expone a situaciones de posibles conflictos de impredecible resolución.

En el marco del capítulo séptimo hemos procurado mantener un cúmulo de estímulos a los

distintos sectores involucrados en el desarrollo de la actividad a fin de compensar las desventajas comparativas que afectan su competitividad internacional, fundamentalmente cuando la misma se desarrolla en nuestra querida región patagónica.

En cuanto al régimen de pesca previsto en el capítulo octavo, es de destacar que ha sido motivo de arduos debates en la comisión y probablemente lo siga siendo en el futuro. Analizadas al respecto las distintas propuestas que se han elaborado, tanto en el ámbito nacional como internacional, surge en una primera impresión que las sanas intenciones de lograr, a través de ese régimen, un mecanismo eficaz de protección del recurso han pecado de exagerado optimismo.

**Sr. Moreau.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Presidente (Menem).** — El señor senador por Buenos Aires le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

**Sr. Ludueña.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Moreau.** — Señor presidente: con el mayor de los respetos, que el señor senador sabe que tengo por él —obviamente, al igual que por el resto de los senadores—, teniendo en cuenta que el miembro informante de la minoría ya dijo que va a insertar su discurso, rogaría que inserte lo que resta de su exposición o que redondee, de modo tal de asegurar que el esfuerzo anterior valga la pena y podamos avanzar en el tratamiento de los demás temas.

**Sr. Presidente (Menem).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Ludueña.** — En atención al razonable pedido del señor senador y después de haber conciliado las posiciones en tan áspero debate al que hemos asistido muchos señores senadores, voy a solicitar la inserción de lo que resta de mi discurso en el diario de sesiones.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

Cualquiera sea el método que se adopte, esta función difícilmente pueda ser cumplida, toda vez que los regímenes de pesca tienen por finalidad principal determinar las condiciones en que los particulares accederán al recurso y cómo se distribuirá la renta pesquera, y quién soportará los costos extra-empresarios de sostenimiento de la actividad, pero no así la conservación del

recurso, la que en gran medida continúa dependiendo del control que efectivamente ejerza el Estado.

También al resolver la adopción del presente dictamen de mayoría, en este punto hemos tenido particularmente en cuenta los denominados derechos históricos de quienes han venido desplegando por años esta actividad y los compromisos que a nivel internacional hemos asumido al suscribir el Acuerdo Pesquero con la Unión Europea; el no haber procedido de esta forma pondría en serio riesgo el principio de seguridad jurídica, tan caro a la comunidad nacional e internacional, y comprometería duramente la responsabilidad patrimonial del Estado.

Pero como no escapa a los miembros de la comisión que nuestro actual régimen es perfectible y que, además, es necesario dotarlo de la mayor transparencia posible, se ha regulado de forma tal que, sin afectar las cuestiones señaladas, se permita, a través de las potestades regulatorias que ejercerá el Consejo Federal Pesquero, introducir en forma paulatina aquellos cambios que las circunstancias, la experiencia y el bien común aconsejen.

También se mantiene la reserva de bandera para la pesca en los espacios marítimos sujetos a nuestra jurisdicción. La misma será irrenunciable en aguas interiores y mar territorial. En lo que hace a la Zona Económica Exclusiva, se prevé un régimen de excepción en el artículo 37 y sucesivos, tendiente a permitir el charteo de buques que permitan absorber la existencia de especies excedentarias.

Sobre esta cuestión debo reiterar que al ratificar Montego Bay hemos aceptado obligaciones internacionales que nos compelen a ceder los excedentes a terceros países, pudiendo éstos exigir el cumplimiento de estas cuestiones a través de los mecanismos de solución de conflictos previstos en la norma internacional citada.

En cuanto al Fondo Federal Pesquero, su integración y distribución mantiene los lineamientos que merecieron su aprobación cuatro años atrás por este Senado.

Por último, debo señalar que el Régimen de Sanciones establecido respeta en líneas generales los antecedentes existentes. A fin de su conformación hemos tenido en cuenta en primer término que el éxito de todo sistema punitivo depende de la eficacia y certeza de su aplicación, más que de la severidad de las penas que consagre.

Sin perjuicio de esto último, dada la reiteración de conductas depredatorias y poco respetuosas de un recurso que en definitiva pertenece a todos los argentinos, la normativa adoptada eleva sensiblemente las penas a aplicar con relación a las establecidas por la ley 20.136, en vigor actualmente, respetando, asimismo, los principios consagrados por Montego Bay con respecto al alcance de las facultades sancionatorias que tienen los Estados partes.

En consecuencia, señor presidente, en la humilde opinión de este Senador, la Comisión que tengo el honor de presidir, ha puesto a consideración de este honorable cuerpo, un proyecto de ley de pesca que, como todas las obras humanas, es perfectible, pero que contempla, en la hora actual, las necesidades e intereses en juego de todos los sectores involucrados, razón por la que solicito su aprobación.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Melgarejo.** — Señor presidente: lamentablemente, el Senado no va a poder realizar un debate sobre este proyecto de ley que está en tratamiento, dado que se ha hecho un extraordinario esfuerzo a los efectos de seguir sesionando esta noche para aprovechar esta última sesión ordinaria, aprobar otros órdenes del día y satisfacer otras necesidades sobre las que tenemos acordados dictámenes.

Simplemente quería manifestar que hemos presentado un proyecto de ley de pesca. En mi caso lo hice como representante patagónico, como senador por la provincia de Santa Cruz, preocupado por un aspecto fundamental que hace a la economía de nuestra región.

Disentimos con el despacho de la mayoría. Los aspectos fundamentales de nuestro disenso estriban en los permisos de pesca, ya que en ese momento la Argentina, el Mar Argentino y nuestra riqueza ictícola están atravesando por una situación muy difícil y complicada.

Nosotros debemos velar por estos recursos, a fin de asegurarlos para las generaciones presentes y venideras, ya que son tan importantes para la Patagonia, para su desarrollo futuro, para que haya asentamientos, mano de obra e industrialización. Es uno de los aspectos en los que disentimos.

Hubiésemos querido, señor presidente, que este debate sobre estos dos proyectos presentados en la comisión se hubiese dado en ella y profundizado hoy aquí. Lamentablemente, eso no fue posible. Pero tenemos la esperanza y una gran expectativa de que lo que no se pudo lograr en esta Cámara —si bien valoramos el esfuerzo que se ha realizado— se dé en la Cámara de Diputados, se logre esta discusión amplia y se mejore sustancialmente esta sanción que va a prestar esta noche el Senado. Ella deberá ser el producto de un amplio consenso de la provincia con el litoral marítimo, interesado en esta problemática, y que no ocurra, como en otra oportunidad, que esta sanción —por no existir ese consenso amplio— muera nuevamente en Diputados.

Los patagónicos de todos los partidos políticos nos comprometemos a impulsar en la Cámara de Diputados, con nuestros legisladores, a partir de este momento, la discusión y la sanción correspondiente.

Dicho esto, voy a solicitar la inserción de mi exposición como miembro informante del dictamen en minoría.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

En mi carácter de miembro informante del dictamen en minoría del proyecto de ley de pesca marítima, vengo a exponer a esta Honorable Cámara, las razones por las cuales nos hemos visto obligados a disentir con el proyecto de Ley Federal de Pesca que han suscripto otros miembros de las comisiones a las que fue girado.

Es nuestro propósito, alcanzar un régimen regulatorio más efectivo para la actividad, por lo tanto, más acorde con el grado de explotación pesquera alcanzado hasta el presente, y al mismo tiempo, brindar un régimen de seguridad jurídica a todos los involucrados.

Es mi convencimiento, que el espíritu que anima a todos los señores senadores, que con tanto ahínco, perseverancia y seriedad han trabajado para obtener los presentes despachos, es el de lograr una ley de pesca adecuada a las nuevas circunstancias por las que atraviesa la actividad.

Sin embargo, debo destacar que la pesca en nuestro país en particular y en el mundo en general, ha llegado a un límite de saturación tal, que ya muchas especies de gran valor se consideran comercialmente extinguidas, si bien biológicamente aún sobreviven; y en esta apreciación señores senadores es que fundamento la necesidad de lograr un régimen de pesca que regule adecuadamente la materia.

En primer lugar, señor presidente, si efectuamos una visión retrospectiva de la actividad pesquera en nuestro país podremos ver que en el pasado y durante muchos años, la misma ocupó un lugar muy marginal en la actividad económica. Es a partir de la sanción de la Ley del Régimen Legal de la Pesca 17.500, hace ya casi 30 años y de los contratos suscritos a lo largo de la década del 80, que tuvieron la función específica de estimular el desarrollo de las capturas y crecimiento de las exportaciones pesqueras, que la Argentina ha elevado el volumen total de pesca, desde aproximadamente las 150.000 toneladas anuales, hacia fines de la década de 1970, a volúmenes superiores a las 1.100.000 toneladas, según las cifras publicadas por el INDEC para fines de 1995. Situación, que más allá de desarrollar la actividad, la ha colocado en el límite de su explotación sustentable.

Argentina, desde hace muchos años se debate entre:

- Políticas pesqueras improvisadas.
- Una legislación inadecuada que básicamente tiende al fomento y desarrollo de la pesca, precisamente cuando el recurso está en franco retroceso.
- Y en tercer lugar, la incapacidad manifiesta por parte del Estado de controlar adecuadamente su litoral marítimo.

La conjunción de estos y otros factores, ha determinado que rápidamente se haya alcanzado el tonelaje máximo que pueda extraerse de la zona económica exclusiva, y que los niveles de captura hayan comenzado a declinar peligrosamente en los últimos años, por agotamiento de los stocks.

El análisis atento de lo ocurrido en otros caladeros del mundo, como los de Canadá, Golfo de Guinea, el Mar del Norte, el Mar Mediterráneo, y muchos otros, debiera servirnos de ejemplo. Esas pesquerías otrora consideradas inagotables, y de las que se hizo un uso irracional de sus recursos, están seriamente comprometidas, y es así que esto llevó a muchos países a prohibir la captura de algunas especies y a fijar cupos para aquellas que aún pueden ser aprovechadas.

Este síntoma de sobreexplotación, fue percibido claramente por toda la comunidad internacional, a tal punto, que la Convención Internacional sobre los Derechos del Mar, dispuso una gran cantidad de normas tendientes a la preservación de los recursos marinos, tanto para las jurisdicciones nacionales, así como también fijó pautas para la relación de los países ribereños con los Estados de flota pesquera, fuera de las zonas económicas exclusivas.

Es por ello, señor presidente, que consideramos inadecuado el régimen de pesca que sostiene el dictamen de la mayoría, ya que el sistema que propone, no capta la realidad de sobreexplotación por la que atraviesa el recurso en nuestro país, insistiendo por ejemplo, en el otorgamiento de permisos de pesca sin límite en cuanto a la cantidad de éstos, ni en cuanto a su prolongación en el tiempo. En una palabra, señor presidente: es más de lo mismo.

Sobre esta cuestión llamo seriamente a la reflexión a los señores senadores.

En segundo lugar, señor presidente, debo destacar que mi condición de patagónico hace que mi preocupación por la cuestión sea aún mayor.

La actividad pesquera se encuentra mayoritariamente radicada en la Patagonia, debido a que la posición geográfica de la pesca ha ido desplazándose paulatinamente hacia esta región, lo que también trajo como consecuencia un cambio en las modalidades de pesca, con una fuerte incorporación de buques factorías y una consecuente tendencia a la disminución de las plantas en tierra.

La actividad ocupa en las provincias de la región, aproximadamente veinte mil personas en forma directa y afecta indirectamente a unas cuarenta mil más. De 1986 a 1995 la exportación de frutos de mar creció de 219 a 902 millones de dólares, y de esa cifra, 600 millones de dólares, se concretó justamente a través de los puertos patagónicos.

Lamentablemente, el afán del gobierno por cumplir con los organismos de crédito internacional, y cerrar las cuentas fiscales, hizo que una vez más, el Poder Ejecutivo adoptase medidas tales como la eliminación de reembolsos por exportaciones a través de puertos patagónicos, que perjudicarán en los hechos a miles de argentinos, que en este caso serán miles de patagónicos sin trabajo.

Como representante de la provincia de Santa Cruz, señor presidente, no puedo dejar pasar por alto esta circunstancia, ya que este nuevo manotazo al bolsillo de los patagónicos, afectará de manera determinante la evolución de la actividad en el sector pesquero, y lo condicionará respecto de su evolución futura. Señor presidente el régimen de pesca industrial, debe implicar un cambio completo respecto del actualmente vigente, y funda-

mento lo que afirmo, en el hecho de que, aún no se ha tomado plena conciencia de la notable expansión de las capturas que se han producido desde 1991, las que han más que duplicado el promedio histórico de la década pasada.

La situación que actualmente prevalece en las pesquerías de mayor valor comercial es una intensa explotación, que en algunos casos presenta inquietantes evidencias de que se han sobrepasado los límites de sustentabilidad biológica a largo plazo. Las implicancias de este notable aumento de las capturas determina que el eje de la cuestión se deba desplazar de la promoción del desarrollo de la actividad, al control de las capturas orientado a lograr la sustentabilidad del recurso; así como que complementariamente, se plantee la necesidad de aumentar los recursos dedicados a la investigación y al control de la actividad de los buques de naciones no ribereñas.

La defensa de la soberanía no debe pasar por la verbosidad y la declamatoria, debe traducirse en actos y en efectividades conducentes. La soberanía se defiende investigando el recurso ictícola y patrullando el litoral marítimo, otorgando los recursos necesarios a nuestras universidades y a los institutos especializados para que investiguen, así como también a la Prefectura Naval Argentina y a la Armada de nuestro país, porque en la defensa de nuestros recursos, está también la defensa de la patria.

Debemos reconocer que hemos dejado atrás, la correcta percepción que prevalecía en la década pasada, de ser un país rico en recursos pesqueros que no se aprovechaban por falta de explotación suficiente.

Pero afirmo que, este mismo reconocimiento de una nueva realidad, obliga a asumir la necesidad de cambiar el régimen que regulaba aquella subexplotación, por otro adaptado a las circunstancias actuales. Del mismo modo, es necesario que el nuevo régimen sirva también para administrar otras pesquerías, en las que si bien no se ha evidenciado hasta el presente un interés por su explotación comercial, podrían ser objeto del mismo, con una promoción inteligentemente diseñada.

La evolución de la pesca marítima durante los últimos años ha sido, según las cifras que dispongo de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación, la siguiente:

Para 1990: 545.000 toneladas.

1991: 630.000 toneladas.

En 1992: 692.000 toneladas.

1993: 920.000 toneladas.

Para 1994: 938.000 toneladas.

Y para 1995: 1.137.000 toneladas.

De ese total, la merluza, durante 1995 ocupó aproximadamente el 55 % con 621.000 toneladas, que superó en 219.000 toneladas, las capturas máximas permisibles de la especie.

El análisis de la sobrepesca de esta especie nos indica que hasta 1992, se mantuvo por debajo de las capturas máximas permisibles, pero a partir del año 1993 comienza a incrementarse la pesca en forma alarmante, y ya para el año 1994 las capturas sobrepasaron en aproximadamente 65.000 toneladas, las 400.000 toneladas anuales, determinadas para el aprovechamiento sustentable del recurso.

El langostino, si bien en cuanto a tonelaje no es significativo, su captura máxima permisible está estimada en 10.000 toneladas, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación. Ha sufrido una evolución espectacular desde las 8.200 toneladas de 1991, pues pasó a más de 24.000 toneladas al año siguiente, con un descenso pronunciado en los años siguientes:

17.600 toneladas en 1993

16.000 toneladas en 1994.

Acusando una pronunciada baja en 1995, con sólo 6.700 toneladas, lo que es una muestra clara de los signos de agotamiento del recurso langostino.

En cuanto al calamar, otra especie cuantitativamente importante, con una captura cercana a las 200.000 toneladas, si bien de acuerdo a estas cifras no estaría dentro de la zona de peligro de extinción, debemos considerar que, por tratarse de una especie migratoria, la sobrepesca se produciría fuera de las 200 millas marinas.

Las cifras de tonelajes de captura anteriormente señaladas son datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación o el INDEC y como comprenderán los señores senadores, no incluyen la pesca furtiva, o la que se realiza en el límite de las 200 millas marinas; por lo que podemos suponer que la realidad en lo que a la sustentabilidad del recurso se refiere, es aún más grave que la descrita.

En suma, el esfuerzo pesquero en nuestro litoral marítimo se compone en términos generales, actualmente de la siguiente forma:

- Merluza: 50 %,

- Calamar: 20 %,

- Polaca, langostino, corvina, caballa, abadejo, anchoíta, gatuza y otros: 30 %.

Las especies que se encuentran actualmente con niveles de captura, por encima de su rendimiento sostenible son: merluza, polaca, corvina y pescadillas.

Este es sin dudas, el principal problema que plantea la pesca en la actualidad.

Para el caso de la merluza, por ejemplo, haciendo un análisis de lo pescado, a través de los certificados de embarque de exportación, puede advertirse que gran cantidad de las capturas efectuadas en los últimos años, se realizan sobre ejemplares que aún no han alcanzado su madurez sexual, lo que da una clara idea de que el esfuerzo pesquero a niveles normales, ya no alcanza para satisfacer las previsiones económicas de las empresas del sector.

La necesidad de regular la explotación de los recursos del mar, ha sido reconocida universalmente, y se asienta en que la pesca comercial es una actividad que tiene características que la diferencian de otras actividades económicas, y que son indispensables para entender la naturaleza y la particularidad del negocio pesquero.

Y sostengo que el principal de esos elementos diferenciadores, es que al explotarse comercialmente recursos renovables que pertenecen a toda la sociedad, la pesca carece de incentivos conservacionistas, por lo que, de no mediar la intervención reguladora del Estado, se llega inexorablemente a la depredación.

Y, ... señor presidente esta ausencia de propiedad sobre el stock pesquero no capturado, hace que la con-

servación no pueda lograrse de un modo espontáneo, ya que toda coordinación de conductas para conservar el recurso, implica una forma de inversión no apropiable.

Con respecto al rol del Estado me parece fundamental puntualizar que el desarrollo económico lo han logrado solamente los Estados duros o fuertes: aquellos que cobran impuestos, por ejemplo, o que investigan y castigan a quienes cometieron un delito.

Creemos que el Estado debe ser una estructura severa que hace cumplir las leyes.

No se conoce ningún caso de desarrollo a partir de la fragilidad del Estado, de la falta de idoneidad y de moralidad de sus políticos y funcionarios.

La opción no es, entonces, entre "más" y "menos" estatización sino entre tener o no tener Estado.

Cierto liberalismo cree que el Estado capitalista sólo es el reino del mercado. La diferencia entre un sistema capitalista y otro socialista es que en éste gran parte de lo que sucede en la sociedad es actividad estatal, mientras en aquél la mayor parte de la actividad económica está en manos privadas. Pero en ambos casos la actividad estatal es igualmente necesaria: existen ciertas funciones que, en aras del bien público, el Estado no delega.

Por otro lado, la actividad de las empresas pesqueras en nuestro país no ha escapado a la falta de una política para el sector.

Hoy, ... uno de los grandes interrogantes de futuro al que nos enfrentamos es la falta de proyectos de largo plazo que sean viables económica y técnicamente.

Lamentablemente la falta de tradición empresaria en algunos sectores de la actividad y la carencia de un sistema adecuado para su regulación, han posibilitado que año tras año, se incorporen nuevos explotadores con escaso conocimiento de la misma, atraídos sólo por la rentabilidad segura que ciertos aspectos del negocio presenta.

Nuevamente ... el recurso es quien ha sufrido las consecuencias.

Por ello sostengo que, a medida que el esfuerzo de pesca aumenta, se incrementa paralelamente el incentivo para capturar la renta presente, siguiendo así un camino que lleva por un lado inexorablemente a la sobreexplotación y, por otro lado a la existencia de recursos ociosos que terminan planteando graves problemas de reconversión.

A lo anterior cabe agregar tres características adicionales que reducen la capacidad de los pescadores para reaccionar ante las señales que evidencian el peligro de extinción o desaparición temporal de una especie, como son:

Primero: el libre acceso al mar.

Segundo: la incertidumbre sobre la cuantía del recurso y

Tercero: la falta de selectividad en las tecnologías de captura.

Como ejemplo de esto último vale hacer notar que las artes de pesca utilizadas son en múltiples casos, inconvenientes para la preservación del recurso. En reiteradas oportunidades se utilizan mallas de pesca de un grosor que no permiten que los ejemplares juveniles puedan escapar, tal es así que podría inferirse que la misma cantidad que se aprovecha, es la que se arroja al mar.

Esta situación, parece no ser advertida en el dictamen de la mayoría, pues en estas condiciones, las prácticas conservacionistas no pueden prosperar ya que son en esencia una "inversión" para aumentar un stock futuro que no es apropiable, dejando abierto así un sendero vicioso que sólo la imposición de la autoridad pública puede quebrar, coordinando compulsivamente las conductas individuales.

La principal implicancia práctica de la anterior caracterización, es que los resultados de la explotación de una pesquería, sin la intervención adecuada del Estado, reconocerán un estadio inicial en el que los márgenes de utilidad serán superiores a los de otras actividades económicas.

Ello, como ha sucedido en nuestro país, atrae a nuevos inversores, que al ir aumentando el grado de explotación de la pesquería, reducen progresivamente la productividad del esfuerzo pesquero y la rentabilidad del negocio, hasta que la disipación de la renta quita incentivos para nuevos ingresos al mercado.

Surge de lo anterior, que en la actividad pesquera, la preservación de la rentabilidad empresaria depende de la capacidad del Estado para determinar el grado de explotación que es biológicamente sostenible a largo plazo y de la efectividad de los controles para hacerla cumplir.

Creo en la participación del Estado como regulador y promotor de la vida económica.

Promotor en el sentido de incitar la actividad en diversas áreas de la economía, para lo cual creemos necesario formular políticas activas, y regulador en el sentido de elaborar reglas de juego adecuadas para aquellas actividades que por su naturaleza o por la conformación, como es la pesquería, constituyan mercados imperfectos que exijan que el Estado fije normas para evitar los abusos. En este caso en detrimento del recurso y de las futuras generaciones de la Patagonia.

Preservando el recurso, podremos preservar las fuentes de trabajo y el crecimiento económico de la región patagónica a partir de una explotación biológicamente sustentable.

Es por eso que la intervención del Estado para regular el esfuerzo pesquero, es una función irremplazable que reconoce distintas modalidades en una pauta común de evolución.

Así las primeras medidas de intervención adoptadas en todos los países, fueron el estudio de la biología de las principales pesquerías, el control del acceso al mar mediante la emisión de licencias de pesca, y el patrullaje marítimo para asegurar una efectiva exclusión de quienes carecían de ellas.

En los países donde la explotación de los recursos marinos siguió una trayectoria ascendente, inicialmente la regulación de la actividad pesquera se realizó de modo indirecto, mediante permisos de pesca concedidos a los buques y regulaciones sobre las tecnologías empleadas, que tendían a limitar el esfuerzo de pesca potencialmente aplicable.

Al avanzar el grado de explotación, se pasó a medidas de control directo de las capturas mediante el establecimiento de cuotas globales, que daban lugar a cierres de temporada y vedas temporales de pesca, al alcanzarse el límite establecido por la autoridad pesquera.



Hasta aquí, los países a los que hacía referencia transitaron el mismo sendero que las circunstancias han ido imponiendo en el nuestro.

Pero... visto que el efecto no deseado que tiene el régimen de las cuotas globales, es el de desatar una "carrera por pescar" que atenta contra la discriminación en las capturas y crea un círculo vicioso que lleva a la depredación; el enfoque del control, evolucionó en función de la experiencia, de una u otra forma, hacia los regímenes de cuotas individuales.

Sin embargo, señor presidente, el dictamen de la mayoría, parece no haber registrado esta evolución operada en los últimos veinte años.

En nuestro país, habiéndose llegado en 1995 a un récord de más de 1.100.000 toneladas de capturas para la totalidad de las especies, se ha hecho más urgente que nunca aplicar medidas de control de carácter directo, para lo cual la disyuntiva es avanzar en la aplicación de cuotas globales y correr el riesgo de repetir la experiencia negativa de otros países al respecto, tal como lo propone el dictamen de mayoría, o bien adoptar un régimen de cuotas individuales que permita una mejor administración y control del recurso, como el que estamos proponiendo en el presente dictamen.

En la actualidad, catorce países en el mundo aplican total o parcialmente regímenes de cuotas individuales que, al otorgar una forma de derecho de propiedad sobre el stock futuro, establecen un incentivo a las conductas conservacionistas, que permite la conciliación del interés individual con el de la sociedad.

Surge del análisis de estas experiencias que los regímenes de cuotas individuales, sobre todo cuando son transferibles y dan lugar al surgimiento de mercados secundarios, tienen una enorme potencialidad para inducir conductas acordes con la explotación racional del recurso, entre las que cabe mencionar a las siguientes:

1º) Al ser considerada la cuota un activo que las empresas incluyen en sus balances, cuando están definidas como un porcentaje fijo sobre la cuota global del año, todo aumento del stock pescable se traducirá en un incremento patrimonial y toda reducción en una pérdida, alentando así a exigir una mayor efectividad de los controles y a denunciar cualquier tipo de violaciones al régimen.

2º) Al eliminarse la rivalidad por el recurso que surge de la posibilidad de cierres de temporada y vedas, la actividad extractiva puede tomarse con calma, dirigiendo el esfuerzo de pesca hacia los ejemplares adultos, que son los que permiten maximizar el ingreso cuando existe una limitación cuantitativa a la captura.

3º) Dado que el Estado puede intervenir en el mercado secundario de cuotas comprando o vendiendo las mismas, para regular el esfuerzo de pesca; ello permite tener la flexibilidad necesaria para adecuarse a los imprevistos de carácter biológico o comercial, que puedan surgir durante las temporadas.

4º) Dado que las cuotas individuales son un activo más realizable que el permiso de pesca concedido a un bloque, se facilitan los préstamos bancarios y se evita que la liquidación, en los procesos de quiebra, quede trabada por las demoras en la venta de buques con permiso.

5º) Finalmente, en las pesquerías poco explotadas se hace posible promocionar su pleno aprovechamiento, ya que al asignar de una sola vez derechos de pesca, se incentiva el interés empresarial. Es así, que quienes no se decidan a participar de las licitaciones correspondientes, corran el riesgo de tener que comprar luego su entrada, a quienes lo decidieron a tiempo.

No obstante las diferencias existentes entre la regulación mediante cuotas globales e individuales, ambas tienen en común la necesidad de ejercer un estricto control de los desembarcos y una mayor investigación de los montos de captura sostenibles, lo cual resulta muchas veces incompatible con su financiamiento por toda la comunidad.

Esta necesidad se suma al problema de la asignación no arbitraria de las cuotas, para hacer aconsejable que se realice mediante licitaciones que consideren como criterio adjudicatorio la mejor oferta del pago de un canon anual de pesca. De este modo no sólo se obtendrán recursos para asegurar a las generaciones futuras la intangibilidad del recurso sino que se introduciría en un sector que tradicionalmente no se caracterizó por la transparencia de los procedimientos un método de asignación impersonal y automático.

Una particularidad importante del régimen que proponemos, es que las cuotas de pesca sean asignadas a las personas físicas o jurídicas y no a los buques de su propiedad ya que esto permite una mayor flexibilidad y transparencia en la administración pesquera. Ello hará posible que parte de la flota argentina, especialmente aquella de capitales nacionales, pueda renovar sus unidades sin pasar por trámites burocráticos, permitiéndole independizar el valor del buque del de su permiso de pesca. De ese modo se rompe el círculo vicioso originado en el régimen de acceso al mercado pesquero que, al estar asentado en el otorgamiento restrictivo de un permiso gratuito, temporalmente indefinido y a un buque en particular, dio lugar a una tradicional falta de transparencia en los trámites, a comportamientos rentísticos, a la obsolescencia del capital más antiguo, al riesgo de sobrepesca de las especies más valiosas y a la falta de recursos presupuestarios para mejorar el conocimiento del stock pescable y el control del mar territorial.

El segundo tema que hace a una diferencia sustancial con el dictamen propuesto por la mayoría, es el procedimiento elegido para la conformación del COFEPE (Consejo Federal Pesquero), y el rol que al mismo se le asigna.

Por nuestra parte, en nuestro dictamen establecemos que el COFEPE es la autoridad de aplicación de la ley.

El dictamen de mayoría, por su parte le asigna al Consejo Federal un rol secundario y subordinado a las directivas de la Secretaría de Pesca, quien se constituye de tal forma en autoridad de aplicación.

Queremos destacar señor presidente, que en nuestro dictamen, el procedimiento elegido para la conformación del COFEPE queda reservado exclusivamente a las provincias con litoral marítimo y a la Nación, quienes conjuntamente decidirán la instrumentación del mismo, en cuanto a su objeto, estructura orgánica, composición, competencias, etcétera. Este procedimiento, que se inscribe dentro de un verdadero federalismo de concertación, y que reconoce su espíritu en el artículo 124 de la Constitución Nacional, permitirá vertebrar de manera

definitiva los intereses, muchas veces contrapuestos entre la Nación y las provincias, al brindar una herramienta para la solución de potenciales conflictos interjurisdiccionales. Creemos que la puesta en práctica de mecanismos institucionales como el propuesto, constituirá una respuesta eficaz, para un Estado que necesita reestructurarse, dejando atrás décadas de ineficiencia y centralismo.

La autoridad de aplicación que contempla el proyecto se inscribe dentro de un marco innovador, que trata de rescatar el espíritu contenido en el nuevo artículo 124 de la Constitución Nacional.

El mismo ha sido introducido por la reforma de 1994. Allí por primera vez en nuestra ley fundamental se incluye el concepto de región. El texto en lo que respecta a este tópico reza así: "Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines..."

Es importante tener en cuenta el alcance que le ha dado el constituyente a la región. Pensamos que su finalidad está vinculada con el desarrollo económico y social, así como también con la necesidad de compatibilizar y armonizar facultades interjurisdiccionales y/o concurrentes. Ello a fin de evitar superposición de autoridades y fragmentación de responsabilidades en aras de lograr la resolución concertada de conflictos y la búsqueda de soluciones conjuntas a asuntos compartidos.

Acá no se está creando un nuevo nivel político de gobierno, sino que la provincia sigue siendo el centro de redistribución territorial del poder, y la región está consagrada al logro de objetivos de carácter económico y social.

La Constitución ha optado así, por una concepción jurídica de la región en sentido particular, ya que se la reconoce sólo para el cumplimiento de fines limitados.

En otros ordenamientos, en cambio se la concibe en sentido más pleno, es decir, como una forma de descentralización política dotada de autonomía, como en los casos de España e Italia. Las provincias gozan de esta nueva facultad, la que debe realizarse a través de la celebración de convenios, con conocimiento del Congreso de la Nación.

En función de lo antedicho, todo acuerdo de integración regional, debe pasar por la modalidad de los llamados tratados parciales que instituye el artículo 125 de la Constitución.

Hoy, con los distintos tipos de convenios que estimula la Ley Fundamental, estos acuerdos deberían cobrar un nuevo auge.

Inspirados en esta filosofía, estamos proponiendo la celebración de un tratado entre la Nación y las provincias marítimas, para la gestión de facultades comunes vinculadas con la conservación y explotación del recurso pesquero.

Se trata de adoptar una decisión política, que fundada en una visión global de la problemática de la pesca, ofrezca soluciones orgánicas y progresivas, basadas en la voluntad conjunta de las jurisdicciones interesadas en llevar adelante un proyecto que presenta ciertas características de tipo regional, en especial para la Patagonia.

Por otra parte entendemos que existe una urgencia en la celebración del instrumento que lleve a la concreción

del Ente que actuará como nueva autoridad de aplicación en la materia.

Dejamos en mano de las partes intervinientes, la determinación de aquellos aspectos que se sustentan en decisiones de contenido político-institucional, y que hacen a la voluntad exclusiva de sus respectivos gobiernos.

Nos referimos fundamentalmente, a la naturaleza jurídica del Ente, lo cual se vincula con el alcance de sus atribuciones, y, en particular, con el ejercicio del poder de policía. Los caracteres de este último deberán contemplar tanto al perfil institucional de su titular, como los medios con que el mismo deberá ser dotado para llevar a cabo su cometido.

Paralelamente al régimen de pesca industrial, regulado en el capítulo IV hemos incorporado en el capítulo V del dictamen de minoría, un régimen distinto para la pesca artesanal, que atendiendo al grado de explotación alcanzado en las pesquerías costeras y a la magnitud económica de esas explotaciones, las pone al margen del establecimiento de cuotas individuales de captura, y por consiguiente, del pago de cánones de pesca.

Para ello se establecen las previsiones destinadas a impedir la desvirtuación del régimen, definiendo el tipo de embarcaciones y el carácter de sus titulares, así como también disposiciones que permitan establecer medidas de conservación cuando existieran evidencias firmes de fuerte explotación.

Se añade a lo anteriormente señalado, que el régimen actual está definido fundamentalmente por normas de jerarquía inferior a la ley, lo cual resulta incompatible con la seguridad jurídica que requiere invertir capitales en esta actividad con criterio de largo plazo.

Un punto contemplado con especial cuidado en nuestro dictamen, es el de las plantas de procesamiento en tierra. El mismo régimen de onerosidad establecido para adquirir el derecho a acceder a una cuota individual de pesca, contiene un incentivo para que las empresas procuren recuperar rentas, agregando valor a la captura.

No obstante esto, se ha procurado reforzar el incentivo, introduciendo algunas disposiciones especiales.

La primera de ellas, para obtener un mayor puntaje, en la asignación inicial del 50 % de las cuotas individuales en forma gratuita, ordena que se tenga en cuenta la posesión de plantas de procesamiento en tierra por parte del licitante.

La segunda es habilitar a las empresas con dichas plantas a licitar cuotas individuales sin poseer buques, mediante el arrendamiento temporario de buques extranjeros o la contratación de buques nacionales, con permiso de pesca.

La tercera y última es equiparar el personal operativo de las Plantas de Procesamiento en Tierra al personal embarcado de nacionalidad argentina, permitiendo que se deduzca del pago del canon el 15 % de los sueldos y salarios abonados. De este modo el nuevo régimen no sólo innova en la regulación de la etapa primaria de la actividad, sino también en la industrial, al establecer incentivos a su recuperación y expansión.

Otra de las diferencias fundamentales que mantenemos con el dictamen de la mayoría es la referida al régimen de infracciones y sanciones.

En el Capítulo VIII, de nuestro dictamen, se tipifican las faltas y se establecen puntualmente las sanciones que corresponden ante la comisión de cada una de las infracciones. Mientras que en el dictamen de mayoría, las infracciones se establecen en forma genérica y las sanciones a aplicar quedan al arbitrio y discreción de la Secretaría de Pesca.

Para ello, se tuvo en cuenta que esta ley es, además de regulatoria de la actividad pesquera, fundamentalmente proteccionista del recurso natural en explotación, que por su calidad de renovable, es particularmente sensible a sufrir graves alteraciones biológicas que pueden llevarlo a su completa extinción. Debido a este peligro, su explotación comercial, se debe realizar en un marco de estricta planificación y control, a fin de preservar su sustentabilidad en el tiempo.

Otro aspecto negativo para la conservación del recurso, y que se trata de erradicar a través del dictamen que firmamos en minoría, es la lentitud en incorporar los conocimientos científicos y técnicos que van generando los organismos de investigación y que constituyen una base sólida para introducir rápidas modificaciones en los planes pesqueros, a la luz de la nueva información.

También, a través de nuestra propuesta, se procura evitar mediante una planificación adecuada de la actividad, que factores económico-financieros coyunturales, distorsionen los programas de explotación y comprometan el futuro pesquero del país.

A efectos de revertir esta situación, recuperar los niveles poblacionales anteriores, evitar la pesca furtiva, la depredación y el uso de artes y equipos de pesca destructivos, así como la violación de las vedas, los reglamentos y el falseamiento de la información, se han establecido severas sanciones para los infractores, las que, rigurosamente aplicadas, permitirán la preservación de la población ictícola, para usufructo de las generaciones presentes y futuras.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut del Partido Justicialista.

**Sr. Mac Karthy.** — Señor presidente: seré muy breve.

Como coautor del proyecto de ley en consideración, quiero manifestar mi satisfacción por haber llegado a su tratamiento en esta sesión. Esperamos que esta iniciativa tenga el éxito que no tuvimos anteriormente. Consideramos que el texto en consideración ha mejorado bastante con respecto al sancionado por el Senado en la oportunidad anterior.

El sector pesquero es uno de los más dinámicos de la economía nacional, que ha alcanzado en concepto de exportaciones en el último año casi 1.000 millones de dólares. Sin embargo, carece de la ley marco que se requiere para dar tranquilidad a todos quienes participan de las actividades del sector: empresarios, trabajadores y, fundamentalmente, provincias ribereñas, que saben que la expansión de ese sector constituye

una fuente de trabajo para la región patagónica, máxime teniendo en cuenta que en las provincias que componen dicha región no tienen demasiados sectores que permitan brindar plena ocupación, como puede ocurrir con otros sectores del país.

Entiendo que con esta sanción estamos garantizando para las provincias su jurisdicción sobre las doce millas marinas y que con la creación del Consejo Federal Pesquero garantizamos su participación activa en ese sector de la economía. A través de esta iniciativa concedemos también el derecho a veto a las provincias ribereñas para el otorgamiento de los permisos de pesca, a la vez que garantizamos que en las tripulaciones de los barcos que se dediquen a esta actividad haya, por lo menos, un 75 por ciento de personal argentino embarcado. Asimismo, con la creación del Fondo Nacional Pesquero estamos garantizando la actividad de investigación del sector y la participación de las provincias ribereñas.

Por todo ello, entiendo que este proyecto de ley va a cubrir una sentida necesidad que existe en el área, motivo por el cual solicito que el cuerpo me acompañe con su voto afirmativo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro del bloque de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Gagliardi.** — Señor presidente: apoyo lo manifestado por el señor senador Moreau, y a los efectos de que el esfuerzo realizado por el cuerpo para proseguir esta sesión tenga sus frutos, pido la inserción en el Diario de Sesiones de los fundamentos del dictamen en disidencia que hemos emitido oportunamente. De todos modos, quiero formular dos o tres comentarios.

Como rionegrino y como patagónico, no me conforma el proyecto propiciado por la mayoría, puesto que considero que no pone el orden necesario que se requiere para dictar una ley de pesca tan esperada y necesitada por las provincias con litoral marítimo. No tenemos la base fundamental, como el ordenamiento de los permisos de pesca ya otorgados y de los convenios internacionales que el país ha firmado para poner coto a la sobreexplotación de nuestros recursos marítimos.

Quiero también hacer un llamado a la reflexión: mientras los países europeos están destinando ingentes sumas de dinero en subsidios —que llegan a los 3.800 millones de dólares— para deshacerse de sus flotas pesqueras obsoletas, nuestro país está recibiendo a través de asociaciones con empresas toda esa chatarra que viene a morir a nuestros mares. Y no solamente

eso, sino que allende las 200 millas estamos dando la oportunidad para que creen islas a fin de aprovechar nuestros recursos pesqueros.

Por otra parte, el proyecto de ley en consideración brinda a esos barcos la posibilidad de que tengan acceso directo a las costas de nuestro litoral marítimo para su reabastecimiento y mantenimiento, con el problema que ello conlleva en cuanto a las ventajas competitivas que tendríamos en cuanto a costos si a esas flotas pesqueras no les diéramos esas facilidades.

En síntesis, los puntos fundamentales de nuestra disidencia están relacionados con las facultades del Consejo Federal Pesquero, con el régimen de sanciones que se establece y con la protección de la biodiversidad de nuestros recursos.

Por tales razones, señor presidente, considero que es una lástima que no se haya podido realizar aquí el debate de esta cuestión, porque son muchos los intereses y los millones de dólares en juego y este proyecto no nos brinda el ordenamiento necesario que esperábamos, razón por la cual vamos a insistir en la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a llamar para votar.

—Así se hace.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar en general.

Como es costumbre, se votará en primer término el dictamen de mayoría.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en particular.

**Sr. Verna.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Verna.** — Solicito que se vote por capítulos, señor presidente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración, se procederá a votar por capítulos.

—Se enuncia y aprueba el capítulo I, artículos 1º y 2º.

—Se enuncia el capítulo II, artículos 3º y 4º.

**Sr. Melgarejo.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Melgarejo.** — Señor presidente: voy a solicitar que en el artículo 3º se incorpore la palabra "exploración", luego de las expresiones: "...y ejercerán esta jurisdicción para los fines de su...", y luego continúa la misma redacción.

**Sr. Presidente (Menem).** — Señor senador: ¿acepta la modificación?

**Sr. Ludueña.** — Sí, la comisión la acepta.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo II, con la modificación propuesta y aceptada para el artículo 3º.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado el capítulo II.

—Se enuncia y aprueba el capítulo III, artículo 5º.

—Se enuncia el capítulo IV, artículos 6º al 11.

**Sr. Cafiero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: en el artículo 9º, que instituye el Consejo Federal Pesquero, propongo que se sustituya, entre los representantes del Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, ya que es a esa autoridad nacional a la que le corresponde vigilar la aplicación de las normas relativas a la conservación de la fauna y la flora nacional y la preservación de la diversidad biológica.

Por lo tanto, entiendo que esta repartición del Poder Ejecutivo nacional debe formar parte de ese Consejo Federal Pesquero y, para no alterar la relación de sus miembros, propongo que se la incluya en sustitución del Ministerio del Interior.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Ludueña.** — La comisión acepta la modificación propuesta por el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo IV, con la modificación propuesta y aceptada para el artículo 9º.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado el capítulo IV.

—Se enuncia el capítulo V, artículos 12 al 16.

**Sr. Melgarejo.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Melgarejo.** — Señor presidente: quiero solicitar la incorporación de un nuevo artículo, que se incluiría luego del artículo 16, cuya redacción es la siguiente: "Los fondos a los que se refieren los artículos 7º y 8º de la ley 20.489 pasarán a integrar los recursos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), establecido en el artículo 6º de la ley 21.673". Y lo fundamento de la siguiente manera, señor presidente: en oportunidad del tratamiento del artículo 72, votaremos por la negativa la derogación de los artículos 6º, 7º y 8º de la ley 21.673, que prevén la dotación de recursos con los que cuenta el INIDEP para su funcionamiento.

Más aún; estamos solicitando que los fondos provenientes de las multas aplicadas a los responsables de las actividades de investigación científica y técnica que cometan transgresiones pasen a formar parte de los recursos del INIDEP. Es decir, se pretende otorgar esos fondos al INIDEP para que este instituto de investigación realmente cumpla con su cometido, puesto que no va a poder hacerlo en la medida en que no tenga los recursos correspondientes. A través de esta propuesta estamos garantizando que pueda, efectivamente, cumplimentarlo.

Esta es nuestra propuesta, señor presidente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Ludueña.** — La comisión no va a hacer lugar a la modificación propuesta por el señor senador por Santa Cruz, entendiendo que todos los fondos van a donde corresponde y eso está explicitado en el proyecto que estamos votando.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar el capítulo V, con la redacción que figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado el capítulo V.

—Se enuncian y aprueban el capítulo VI, artículos 17 al 22; capítulo VII, artículos 23 y 24; capítulo VIII, artículos 25 al 39; capítulo IX, artículos 40 al 42; capítulo X, artículos 43 al 45;

capítulo XI, artículos 46 al 48; capítulo XII, artículos 49 al 67, y capítulo XIII, artículos 68 al 72.

—El artículo 73 es de forma.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda sancionado el proyecto de ley<sup>1</sup>.

Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Se van a votar los pedidos de inserción formulados por señores senadores.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Quedan aprobadas las inserciones<sup>1</sup>.

## 8

### REGIMEN DE PENSIONES A EX COMBATIENTES EN MALVINAS

**Sr. Presidente (Menem).** — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda en el expediente C.D.-151/95, insistencia de la Honorable Cámara de Diputados, vinculado con la observación del Poder Ejecutivo nacional al proyecto de ley 24.652 por el que se modifica la ley 23.848, de régimen de pensiones a los ex soldados conscriptos combatientes y civiles que participaron en las acciones bélicas del Atlántico Sur en 1982.

Es necesario que algún senador solicite el tratamiento sobre tablas.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente. La Cámara de Diputados ha insistido en una disposición que ha sido observada por el Poder Ejecutivo. Es intención de este bloque acompañar esa insistencia.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Entre Ríos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (PiuZZi).** — (Lee)

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.